

**EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A CATORCE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS.**

Vista para dictar sentencia la causa penal **159/2005-IV**, instruida contra *********, por la comisión del delito **abuso de autoridad**, previsto por el artículo 215, fracción II, y el diverso **desaparición forzada de personas**, contemplado en el numeral 215-A y penalizado por el precepto 215-B, todos del Código Penal Federal.

******* *******; y,

R E S U L T A N D O:

1. Mediante oficio sin número, recibido en este juzgado a las once horas con quince minutos del seis de octubre de dos mil cinco, el agente del Ministerio Público de la Federación, remitió a este órgano jurisdiccional la averiguación previa *********, donde solicitó orden de captura contra ********* como probable responsable de la comisión del delito de **abuso de autoridad**, previsto por el ordinal 215, fracción II, y el diverso **desaparición forzada de personas**, contemplado en el dispositivo legal 215-A y sancionado por el arábigo 215-B, todos del Código Penal Federal; ilícito, este último, considerado grave conforme al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

2. En resolución de siete de octubre de dos mil cinco, emitida por este recinto judicial se ordenó la aprehensión contra *********, por el delito de **abuso de autoridad**, previsto por el artículo 215, fracción II, y el diverso **desaparición forzada de personas**, tipificado en el numeral 215-A y penalizado por el precepto 215-B, todos del Código Penal Federal.

3. Mediante pedimento *********, de dos de mayo de dos mil seis, la agente del Ministerio Público de la Federación, dio cumplimiento a la orden de aprehensión librada y dejó al indiciado *********, a disposición de este juzgado interno en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, a partir de las doce horas con cincuenta minutos de esa fecha.

En proveído de misma fecha, se tuvo por recibido dicho

pedimento y se ordenó el traslado del inculpado de mérito, del lugar de su detención, para oírlo en declaración preparatoria, lo que aconteció a las diecinueve horas con treinta minutos del dos de los actuales, diligencia en la que tuvo como su defensor al profesionista que designó.

Diligencia en la cual se solicitó la duplicidad del término constitucional, a efecto de desahogar probanzas a favor del indiciado, esto es, se girara oficio al Delegado de la Procuraduría General de la República con residencia en esta localidad, a fin de que informara el parque vehicular con que cuenta dicha dependencia en esta ciudad, así como la designación de dichos vehículos automotores entre los diferentes departamentos que integran dicha delegación, asimismo, para que comunicara el procedimiento a seguir para que cualquier departamento que tenga asignados vehículos de motor pueda disponer de uno distinto de su departamento; las testimoniales de *****; careos entre el inculpado con los dos últimos mencionados y con *****.

El cuatro de mayo de dos mil seis, se celebraron las testimoniales de *****, en diligencia de éste último, la defensa como el inculpado se desistieron de las testimoniales de *****.

El cinco de mayo del actual, se desahogaron las testimoniales de *****, así como los careos entre *****, con los últimos dos mencionados; se desistieron de la testimonial de ***** y del careo del imputado con éste último.

4. Mediante resolución de siete de mayo de dos mil seis, se dictó auto de formal prisión contra *****, como probable responsable del delito **abuso de autoridad**, previsto por el artículo 215, fracción II, y el diverso **desaparición forzada de personas**, contemplado en el numeral 215-A y sancionado por el ordinal 215-B, todos del Código Penal Federal.

Resolución recurrida por el defensor particular; el veintiséis de septiembre de dos mil seis, la Magistrada del Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, confirmó

el auto de bien preso, al resolver el toca penal *****.

5. Seguido el procedimiento, por la vía sumaria, según acuerdo de doce de mayo de dos mil seis; el tres de octubre del año en curso, se declaró el cierre de la instrucción dentro de la presente causa; por cuestión de la interposición del juicio de amparo, contra actos de la Magistrada del Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, de quien reclamó la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil seis, dentro del toca penal *****, es que con base en el dispositivo legal 73, fracción X, párrafo II, de la Ley de Amparo se suspendió el procedimiento de la causa penal.

Posteriormente por oficio 34, recibido en este juzgado federal el veinte de octubre de dos mil seis, el Secretario del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, informó que el procesado de mérito desistió del amparo indirecto *****, lo que motivó que se sobreseyera dicho juicio; es por ello que se levantó la suspensión, y se citó a las partes a la audiencia de vista, prevista por el artículo 307, del Código Federal de Procedimientos Penales, verificada el treinta de octubre actual, en los términos del acta anterior y con efectos de citación a sentencia, la que se dicta hoy, con base en las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S:

PRIMERA. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente para conocer y resolver los hechos relativos a la presente causa, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 50, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6°, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Penales, así como en el punto cuarto, fracción XVII párrafo segundo, del Acuerdo General 57/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el

territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el ilícito en estudio está previsto en una legislación federal, como es el Código Penal Federal; además, los hechos consignados se realizaron dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción.

SEGUNDA. En el sumario existen los siguientes medios de prueba:

a). Copia de nota periodística (foja 4).

b). Declaración ministerial de treinta de septiembre de dos mil cinco, a las diez horas con treinta minutos, de *****, quien manifestó que como a las diez treinta de la noche del veintinueve de septiembre de dos mil cinco, al salir a buscar a uno de sus hijos, de nombre *****, llegó un carro con cuatro personas, dos hombres se bajaron del vehículo y le preguntaron si sabía dónde vendían droga, les contestó no saber, uno de ellos, le dijo “ya te chingamos traemos lo que estás vendiendo”, en eso llegó una camioneta silverado con dos personas a bordo y lo subieron a ella y lo golpearon, en eso vio que su hijo ***** estaba parado en la puerta de su casa observando lo que sucedía, los agentes le preguntaban quien le vendía la droga, que ya tenían un comprador, luego lo llevaron al Oxxo que se encuentra en la entrada de “Riveras del Bravo” con un muchacho a quien supuestamente le había vendido droga, le pegaron los agentes porque él dijo que no lo conocía; lo llevaron al estacionamiento de las oficinas (Procuraduría General de la República) a bordo de la camioneta gris, donde lo esculcaron, le pidieron su identificación, le quitaron un gafete de trabajo y cien pesos moneda nacional, uno de ellos les dijo que si les ponía el “dedo” le iban a dar “piso”, uno de ellos, chaparro, cabello corto, tipo “chilango”, delgado, le dijo le entregara tres mil dólares el treinta de septiembre al medio día, lo subieron de nuevo a la camioneta y lo llevaron a unos taxis por esa zona, uno de ellos se comunicó con un licenciado, le dijo que lo iban a consignar y

que podían solicitar una orden de cateo y que si no le encontraban nada, ellos mismos le iban a poner la droga, luego le dijeron que se fuera a su casa; el otro agente es moreno, cachetón, de un metro setenta centímetros de estatura, cabello abultado negro; agregó que cuando llegó a esas oficinas el día siguiente, en el estacionamiento ubicó la camioneta gris Silverado, y al subir las escaleras del edificio identificó a los agentes que le pidieron dinero, como los dos que tripulaban el vehículo Silverado; la representación social de la Federación y un perito en fotografía, en compañía del de la voz se constituyeron en el estacionamiento de la Procuraduría General de la República y este último identificó el vehículo marca Chevrolet, tipo pick-up, Silverado 2500, color gris, placas de circulación ***** como el mismo que traía los agentes que le pidieron dinero; al tener a la vista el álbum fotográfico del personal adscrito a la Agencia Federal Investigadora, así como de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscrito a esa Delegación Estatal Chihuahua, manifestó reconocer sin temor a equivocarse a los agentes de nombres *****, como quienes le pidieron dinero y lo privaron de su libertad (11 y 13).

c). Álbum fotográfico de agentes del Ministerio Público de la Federación de la Subdelegación de procedimientos penales, de la Delegación Estatal Chihuahua, y personal adscrito a la Procuraduría General de la República (fojas 19 a 31).

d). Álbum fotográfico de agentes Federales de Investigación adscrito a la agencia de la Unidad Mixta para la atención del narcomenudeo en Ciudad Juárez, Chihuahua (UMAN) (foja 32).

e). Dictamen de integridad física de treinta de septiembre de dos mil cinco, rendido por peritos oficiales adscritos a la Procuraduría General de la República quienes concluyeron que ***** no presentó huellas de lesiones traumáticas externas al momento de su examen médico legal (foja 33).

f). Constancia ministerial de treinta de septiembre de dos mil cinco, sobre el vehículo línea pick-up, marca Chevrolet,

Silverado 2500, placas de circulación *****, color gris, a fin de verificar el control (bitácora de kilometraje de vehículo oficial) del que se desprende que dicho vehículo salió de las oficinas a las once horas con diez minutos del veintinueve de septiembre del presente año con 38,535 kilómetros, bajo el resguardo de Omar Santana García y luego regresó el mismo día a las quince horas con 38,616 kilómetros (foja 34).

g). Bitácora de kilometraje de vehículo oficial, de la Fiscalía Especial para la detención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, respecto del vehículo marca Chevrolet pick-up, placas *****, (foja 35).

h). Inspección ocular y fe ministerial de treinta de septiembre de dos mil cinco, respecto de la bitácora de kilometraje de vehículo oficial, de la Fiscalía Especial para la detención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, respecto del vehículo oficial marca Chevrolet, línea pick-up, placas de circulación *****, del Estado de Chihuahua, color gris (foja 36).

i). Inspección ocular y fe ministerial de treinta de septiembre de dos mil cinco, respecto del vehículo marca Chevrolet, tipo pick-up, modelo 2002, color arena, serie *****, placas de circulación *****, así como del vehículo marca Chevrolet, línea pick-up, DN-76-268, color gris (foja 37).

j). Lámina fotográfica sobre el vehículo marca Chevrolet, tipo pick-up C2, modelo 2002, color arena, serie *****, placas de circulación *****, inventario ***** (foja 38).

k). Formato resguardo parque vehicular 2005, de veinticinco de abril de dos mil cinco, sobre el vehículo marca Chevrolet, tipo pick-up C2, modelo 2002, color peweter metálico, serie *****, placas de circulación ***** (foja 39).

l). Tarjeta de circulación 8160536D respecto del vehículo marca General Motors, línea pick-up C y R-20, tipo camión, modelo 2002, serie *****, placas de circulación *****, vigencia 2005 (foja 40).

m). Declaración ministerial de treinta de septiembre de dos mil cinco, de *****, quien manifestó que aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, del veintinueve de septiembre de dos mil cinco, se encontraba en el interior de su domicilio, escuchó que azotaron la puerta principal de su casa, al acudir al lugar la abrió y vio que se encontraban dos tipos uno de ellos agarraba a su padre ***** de la camisa por la parte de la cintura y le preguntaba “dónde estaba el clavo” su padre le contestaba no saber; dijo a su padre que se lo llevarían, sin decir a donde, los dos tipos lo subieron a una camioneta color gris, estacionada frente a su casa y se lo llevaron; salió a buscar a su padre a estación Aldama donde les informaron no saber nada, su hermano ***** le habló a su celular, le dijo le llamó su papá que ya iba rumbo a su casa, por lo que se regresó y su papá ya estaba ahí, le platicó que una de las personas que se lo llevó lo había golpeado y le pidió treinta mil pesos pero en moneda americana por dejarlo ir; al tener a la vista el vehículo pick-up silverado color gris, con placas de circulación ***** manifestó que si se parece pero no esta seguro que sea la misma camioneta que estaba afuera de su casa y en la cual se llevaron a su padre; al tener a la vista el álbum fotográfico del personal adscrito a la Agencia Federal Investigadora y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subdelegación Estatal en Chihuahua, manifestó reconocer sin temor a equivocarse a *****, como las mismas personas que llegaron a su domicilio y se llevaron a su padre; preguntas de la defensa respondió que sólo escuchó que uno de los tipos dijo a su padre “*te vamos a llevar para allá*” y que el tipo de palabras que utilizaron con su papá fueron “baboso y guey” (fojas 46 a 48).

n). Declaración ministerial de treinta de septiembre de dos mil cinco, de Basilio Martínez quien manifestó que como a las diez y media de la noche del veintinueve de septiembre del año en curso se encontraba de guardia, entró al estacionamiento de esas oficinas (Procuraduría General de la República) una

camioneta Chevrolet, pick-up, color arena, con seis hombres se acercó a ver que se les ofrecía le dijeron ser agentes de la AFI, que no pasaba nada uno de ellos le mostró una identificación del AFI, no se percató del nombre ya que no le quiso prestar la credencial, le dijeron que solo estaban arreglando un problema entre ellos que no traían detenidos, se percató que no había nadie esposado estaban cinco en la cabina y uno en la caja; al tener a la vista las fotografías de los agentes Federales de Investigación adscritos a la Delegación Estatal Chihuahua de la Procuraduría General de la República, dijo que ***** es el más parecido al joven que se identificó como agente Federal Investigador al entrar al estacionamiento; al tener a la vista el vehículo tipo pick-up, Chevrolet, Silverado 2500, color gris, placas de circulación ***** del Estado de Chihuahua no la reconoció como la que traían los agentes de la AFI, al momento de entrar al estacionamiento; al tener a la vista la camioneta de color gris, placas de circulación *****, del Estado de Chihuahua, marca Chevrolet, modelo dos mil dos, color arena, dijo ser la misma que traían la noche anterior y estacionaron en esas oficinas los agentes de la Agencia Federal de Investigación (fojas 56 y 57).

ñ). Declaración ministerial de treinta de septiembre de dos mil cinco, de *****, quien manifestó que aproximadamente a las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil cinco, llegó a las instalaciones de la fiscalía especial para la atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el Municipio de Juárez Chihuahua, a la cual esta adscrito como perito técnico en fotografía forense, se dirigió a la coordinación administrativa para solicitar un vehículo oficial para realizar una diligencia lo atendió Héctor del que no recuerda el apellido le dijo que solo estaba una pick-up color gris, con placas de circulación ***** que es la que le prestarían, le dio el formato (bitácora de kilometraje de vehículo oficial) llenó los requisitos y lo firmó; salió en compañía de la licenciada ***** a realizar la diligencia

que término cerca de las tres de la tarde; regresaron a las oficinas, estacionó la camioneta en el lugar que le corresponde a la Fiscalía de la Procuraduría General de la República, llegó al área de Coordinación Administrativa y al no encontrar personal administrativo dejó las llaves del vehículo a la secretaria del turno vespertino de nombre Claudia, de quien no recuerda sus apellidos y se fue a su casa a comer; como a las seis de la tarde regresó a la fiscalía en el edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el Eje Juan Gabriel donde permaneció hasta las nueve de la noche y luego regresó a su domicilio (fojas 59 a 61).

o). Parte informativo de treinta de septiembre de dos mil cinco, rendido por los Policías Federales de Investigación *****, quienes presentaron en las oficinas de la mesa Séptima Investigadora a *****; además informaron no localizar en sus domicilios a ***** toda vez que no se encontraron en sus domicilios (foja 63).

p). Impresión fotográfica de las residencias ubicadas en calle Guadalupe número 6740, fraccionamiento Lomas del Rey, domicilio de *****, así como la ubicada en calle ***** (foja 64).

q). Declaración ministerial del dos de octubre de dos mil cinco, a cargo de *****, quien manifestó que se desempeña en la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República como Supervisor Operativo, sin embargo se encuentra encargado de la Jefatura Regional; desconoce los hechos que se señalan en la nota periodística visible a foja cuatro de la presente indagatoria; por orden del agente del Ministerio Público, ningún agente Federal de Investigaciones abandonó las instalaciones de la delegación, una vez reunidos los agentes federales, una persona del sexo masculino que había denunciado unos hechos, se paró enfrente de todos los que estaban formados, y manifestó no reconocer a nadie, que las personas que había reconocido los había visto en las escaleras internas de la delegación, cuando ingresó; se le

ordenó localizar y presentar a los Agentes Federales de Investigación Víctor Alberto Guerrero Acevedo y Gabriel Durán López, adscritos a esta jefatura regional y comisionados a la Unidad Mixta de Atención a Narcomenudeo, se traslado a la UMAN, en donde se les informó que los elementos a localizar no se habían reportado; se dirigieron a los domicilios de los requeridos, no los encontraron; el día veintinueve de septiembre actual, se presentaron los dos agentes federales (*****) poco antes de las veintiuna horas, solicitaron autorización para retirarse ya que tenían mandamiento ministerial, se autorizó la salida, firmó la lista de asistencia solo Gabriel Durán y a falta de la firma de Víctor Alberto se puso R/T, que significa reporto trabajando; el día viernes treinta de septiembre de dos mil cinco, en el pase de lista a las nueve horas firmaron *****, pero no se presentaron a las veintiuna horas; el día sábado no acudieron a laborar, ni se reportaron vía telefónica, hasta la fecha desconoce el motivo de su inasistencia; por la mañana del dos de octubre de dos mil cinco, se reportaron vía telefónica con el agente *****; el veintinueve de septiembre del año en curso ***** no informaron que tuvieran alguna investigación especial (fojas 75 a 80).

r). Declaración de ***** de dos de octubre de dos mil cinco, quien manifestó que el día de la fecha cubría la guardia a partir de las ocho de la mañana, antes de las diez de la mañana recibió una llamada por parte de *****, posteriormente, como a los veinte minutos habló *****, les dijo que había una orden de localización y presentación girada para ellos, no mencionaron motivo de sus inasistencia laboral esos días, dijeron que se presentarían el día siguiente después del pase de lista que es a las nueve de la mañana, no mencionaron el motivo de su inasistencia, tampoco informaron donde se localizaban; desconocía el motivo de la localización y presentación (fojas 107 a 109).

s). Declaración ministerial de *****, de tres de octubre de dos mil cinco, quien ratificó en todas y cada una de sus

partes su comparecencia de denuncia, agregó que respecto a la identificación que hizo de los agentes, no está muy seguro que hayan sido los mismos que lo agredieron, ya que se encontraba muy nervioso y asustado; solicitó se pusieran a la vista los elementos que señaló para tener la seguridad plena de que sean los responsables, pues así los podría reconocer; no es su deseo volver a presentar a su hijo por ser menor de edad; fueron dos vehículos los que se presentaron en su domicilio el veintinueve de septiembre del año en curso, uno tipo neón, color azul, y una camioneta Silverado color gris, en el neón iban cuatro personas y en la camioneta dos; no le enseñaron ninguna orden de aprehensión, localización o presentación en su contra, ni siquiera se identificaron, no lo amenazaron con armas de fuego; quien iba del lado del copiloto*****, le dio dos puñetazos en la mejilla del lado derecho, y le dijo que se bajara los pantalones y los calzoncillos e hiciera dos sentadillas; no le dijeron ante qué autoridad lo iban a llevar, ni el motivo de su detención o traslado; desde que lo detuvieron hasta que lo dejaron en libertad tardó como unos cuarenta y cinco minutos, solamente observó las oficinas de la Procuraduría General de la República; quien le pidió el dinero fue ***** y que se los entregara el viernes treinta a medio día en el negocio denominado “La Taquiza” (fojas 113 a 117).

t). Declaración ministerial de Israel Ventura Alcántara de tres de octubre de dos mil cinco, quien manifestó no tener conocimiento de los hechos investigados, ya que se encontraba en servicio de guardia el día veintinueve de septiembre de las ocho de la mañana hasta las ocho de la mañana del día treinta, el veintinueve de septiembre a las veintiún horas, en el pase de lista no vio a sus compañeros ***** y Gabriel Durán López (fojas 121 a 123).

u). Declaración ministerial de ***** de tres de octubre de dos mil cinco, quien manifestó no tener conocimiento de los hechos narrados en la nota periodística, que el día veintinueve de septiembre del presente año, realizaba la guardia en traslado

de detenidos al Centro de Readaptación Social; en el pase de lista de las veintiún horas de ese día no recordó haber visto a sus compañeros *****; ya que realizaba un traslado de detenidos (fojas 124 a 126).

v). Declaración ministerial de ***** de tres de octubre de dos mil cinco, quien manifestó no tener conocimiento de los hechos narrados en la nota periodística, realizaba la guardia en traslado de detenidos al Centro de Readaptación Social, junto con *****; en el pase de lista de las veintiún horas del veintinueve de septiembre del año en curso no vio a sus compañeros ***** (fojas 127 a 129).

w). Declaración ministerial de ***** de tres de octubre de dos mil cinco, quien manifestó no tener conocimiento de los hechos narrados en la nota periodística, el veintinueve de septiembre del año en curso, realizaba la guardia en la entrada de los separos, atendía a los detenidos; en el pase de lista de las veintiún horas de ese día no recordó ver a sus compañeros ***** (fojas 130 a 142).

x). Declaración ministerial de ***** de tres de octubre de dos mil cinco, quien manifestó ratificar su declaración de treinta de septiembre del año en curso, la camioneta con las seis personas a bordo, se encontraba hasta el fondo del estacionamiento donde se encuentran los vehículos asegurados; cuando ingresó la camioneta pick up, color arena, al estacionamiento de la Procuraduría General de la República, como a los cinco minutos se dirigió a donde se encontraba dicha camioneta, discutían tres personas del sexo masculino, una de las personas, al parecer lo identificó como *****, ya que es la persona que conducía el vehículo y quien le informó era agente Federal de Investigación, le enseñó un gafete que no vio claramente; al momento de acercarse a la camioneta no observó que estuvieran vejando o maltratando a alguna persona; permanecieron de diez a veinte minutos en el estacionamiento, posteriormente salieron cinco personas de dentro de la camioneta y en la caja iba otra persona; al tener a la vista, en

persona, a *****, señaló no reconocer a ninguno como alguna de las personas que hayan estado el día veintinueve de septiembre en el estacionamiento a bordo de la camioneta Silverado (fojas 133 a 136).

y). Comparecencia ministerial de *****, de tres de octubre de dos mil cinco, quien se reservó el derecho que tiene de rendir declaración ministerial y que la presentaría por escrito (fojas 137 a 140).

z). Comparecencia ministerial de *****, de tres de octubre de dos mil cinco, quien se reservó el derecho que tiene de rendir declaración ministerial y que la presentaría por escrito (fojas 142 a 145).

aa). Informe de tres de octubre de dos mil cinco, suscrito por el jefe regional de la Agencia Federal de Investigaciones, al que anexa copia certificada de la lista de asistencia de la Policía Federal Investigadora, de veintisiete de septiembre al dos de octubre de dos mil cinco; asimismo señala que *****, es el encargado de la Agencia Federal de Investigación comisionado a la UMAN; los vehículos asignados a la UMAN, son una pick up, marca Chevrolet, color arena, placas de circulación ***** del Estado de Chihuahua, así como pick up, Dodge Ram, blanca, placas de circulación ***** del Estado de Chihuahua (fojas 160 y 161).

bb). Oficio ***** de dos de agosto de dos mil cinco, signado por el supervisor operativo de la Agencia Federal de Investigaciones, en el que comisiona a *****, agente federal investigador, como encargado del servicio a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (foja 197).

cc). Resguardo provisional de vehículo modelo mil novecientos noventa y nueve, marca Chevrolet, color arena, placas *****, a favor de ***** (foja 377).

dd). Inspección Ministerial de cuatro de octubre de dos mil cinco, respecto del estacionamiento ubicado en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en esta ciudad (foja 394).

ee). Comparecencia de ***** de cuatro de octubre de dos mil cinco, quien presentó declaración ministerial por escrito, la que ratificó y en la que señala que *****, en su denuncia de treinta de septiembre del presente año, manifestó que unas personas acudieron a su domicilio el día veintinueve de ese mes, aproximadamente a las diez horas con treinta minutos de la noche, lo subieron a una camioneta gris, en la cual lo llevaron al estacionamiento de las oficinas de la Procuraduría General de la República, y le pidieron una cantidad de tres mil dólares; al respecto manifestó el declarante que el jueves veintinueve de septiembre del actual, se encontraba físicamente en las instalaciones de la Procuraduría General de la República para el pase de lista, y aunque no firmó el formato de asistencia el mismo tiene el reporte R/T, que significa reporte de trabajo; posteriormente solicitó permiso para cumplir un mandamiento ministerial, para ubicar un domicilio, fueron a la camioneta marca Dodge Ram, color blanco, placas *****, asignada al grupo de la UMAN, la que está a resguardo de *****, quien esa noche se encontraba en el servicio de guardia, se las prestó desde aproximadamente las doce del día, ya que la camioneta asignada a su persona, Chevrolet Silverado, color arena, placas ***** estaba descompuesta de la rótula desde el miércoles en la tarde, posteriormente de ubicar el lugar, fue a dejar a *****a su domicilio, aproximadamente a las veintidós horas, se retiró a su domicilio y llegó como a las diez cuarenta de la noche, ahí permaneció hasta el día siguiente hasta las ocho treinta, por lo que niega que haya intervenido en los hechos que señaló el denunciante; el viernes en la noche no se reportó al pase de lista ya que la comida le hizo daño, dejó a las siete de la tarde a su compañero en su domicilio, de ahí se fue a la casa de un amigo; el domingo, cuando se reportó al servicio de guardia antes de las diez de la mañana, el encargado *****, le dijo que tenía una orden de localización y presentación, respondió que se presentaría el lunes (fojas 398 a 415).

ff). Comparecencia de ***** de cuatro de octubre de dos mil cinco, quien presentó declaración ministerial por escrito, la que ratificó y en la que negó categóricamente los hechos que se le imputan, siendo conteste su dicho con lo manifestado por ***** (fojas 416 a 438).

gg). Declaración ministerial de ***** de cuatro de octubre de dos mil cinco, quien manifestó que el jueves veintinueve de septiembre del año en curso, prestó a *****
*****, la camioneta que tiene asignada, pick up, Dodge Ram, color blanco, le entregó las llaves a Víctor entre las nueve treinta y diez treinta de la mañana; volvió a ver la camioneta hasta el lunes tres de octubre (fojas 440 a 442).

hh). Declaración preparatoria de ***** de dos de mayo de dos mil seis, quien manifestó ratificar su declaración rendida por escrito ante el agente del Ministerio Público de la Federación, el cuatro de octubre de dos mil cinco, consistente en seis fojas útiles, por un solo lado, tamaño carta y seis anexos en copia simple, la que obra de fojas cuatrocientos dos a cuatrocientos siete de los autos originales; a preguntas del defensor particular contestó que el veintinueve de septiembre del año próximo pasado encontrándose como encargado de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, tenía a su disposición dos vehículos, una camioneta tipo pick up, silverado, color arena, sin recordar las placas y una camioneta ram, pick up, color blanco, sin recordar las placas y cuatro agentes su cargo; la dirección exacta de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo no la recordó pero se encuentra en la estación Babícora de la Policía Municipal, dicho domicilio no es el mismo que tiene la Procuraduría General de la República de esta ciudad, ya que ésta se encuentra ubicada en la Avenida Abraham Lincoln y Hermanos Escobar sin recordar el número, fraccionamiento La Playa; en la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo existen agentes del Ministerio Público de la Federación en el mismo edificio; la base que utiliza como centro de trabajo cuando realiza las investigaciones, capturas de detenido, demás encomiendas,

dónde lleva a cabo los trabajos de oficina, es en la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, a preguntas del agente del Ministerio Público de la Federación, señaló no ser su deseo contestar a las preguntas del fiscal federal (fojas 563 a 565).

ii). Testimonial de ***** de cuatro de mayo de dos mil seis, quien ratificó en todas y cada una de sus partes, la comparecencia ministerial de dos de octubre de dos mil cinco; a preguntas del defensor particular manifestó que las oficinas de la Delegación de la Procuraduría General de la República en esta ciudad se encuentran en la Zona Pronaf, y las instalaciones de la UMAN se encuentran en la estación Babícora de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, no se encuentran en el mismo edificio; el tiempo que tardan los elementos comisionados en la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo para cumplir con el pase de lista que debe de hacerse en las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República, se les cita a las nueve horas y a las veintiuna horas, se da una tolerancia entre diez o quince minutos aproximadamente, se pasa la lista de asistencia que dura aproximadamente de cinco a diez minutos; **Víctor Alberto Guerrero Acevedo** como encargado de la UMAN, realizaba sus funciones en las instalaciones de la UMAN, ya que las investigaciones, y todo el trabajo que se genera del agente del Ministerio Público de esa unidad eran asignados al personal que se encontraba adscrito a ese lugar, y no tenían trabajo asignado de la delegación, ya que por obvia razón, informes, detenidos, y todo el trabajo relacionado con los elementos adscritos a esa unidad es puesto a disposición de los agentes del Ministerio Público que se encuentra adscrito ahí.

A preguntas del indiciado al testigo, éste contestó que el día veintinueve de septiembre de dos mil cinco, ***** si se encontraba físicamente en el pase de lista de las nueve de la noche, aquél solicitó autorización para salir a trabajar y esta dentro de las facultades del dicente poder autorizar este tipo de situaciones ya que son policías las veinticuatro horas del día y el

pase de lista es de control personal, es decir, de que estén físicamente bien, para saber si alguien se encuentra en incapacidad o faltando por alguna otra razón, y si se encuentra faltando por causa injustificada procede a un arresto.

A preguntas de la agente del Ministerio Público de la Federación, contestó el testigo, el acceso de los elementos de la Agencia Federal adscritos a la Jefatura regional en esta ciudad, en las instalaciones de la delegación a efecto del pase de lista, es única y exclusivamente por el portón que se encuentra de lado de las instalaciones de Teléfonos de México, es decir, a un lado de la discoteca "Esfinge" y eso es una orden ya que en esa área se encuentran las oficinas de la agencia federal; las funciones como supervisor operativo sobre *****, eran las mismas para los elementos que se encontraban comisionados al UMAN como para todos los elementos que se encuentran adscrito en la jefatura regional de este Estado, es decir, se les supervisa estadísticamente el trabajo que presentan, la cantidad de operativos y cateos, la asignación y el estado de los vehículos, el pase de lista diario, su comportamiento, su vestimenta, entre muchas otras funciones; para que diga el compareciente en relación a su comparecencia ministerial de fecha dos de octubre de dos mil cinco, cuando refiere que ***** le informó que se retiraría a continuar trabajando y por tanto, no estaría presente en el pase de lista precisamente el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, el motivo era en relación a sus investigaciones asignadas, pero no específicamente de cual; mientras estuvo como encargado ***** de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, eran dos vehículos que estaban asignados a esa unidad, pero específicamente no recordó; respecto a dichos vehículos, recuerda que le habían reportado un vehículo con fallas mecánicas, del cual al parecer ya habían trasladado a un taller mecánico, desconocía la falla, y el taller y en específico el vehículo; quién le reportó el vehículo con fallas mecánicas, al parecer fue ***** porque él era el responsable y encargado

de esa unidad; no recordó cuándo el vehículo que reportó ***** con fallas mecánicas quedó en perfectas condiciones para ser utilizado nuevamente.

A preguntas del defensor al testigo este manifestó que el acceso en la Delegación de la Procuraduría General de la República al público en general, y demás personal de la Procuraduría General de la República exceptuando a los agentes Federales de Investigación es por la entrada que se encuentra enfrente de la avenida Abraham Lincoln, ya que dicha orden se deriva de que adentro de las instalaciones de la delegación como en otras oficinas de Gobierno y por cuestiones de seguridad no pueden andar armados, ese es el motivo por el cual tienen la entrada restringida (fojas 577 y 578).

jj). Testimonial de ***** de cuatro de mayo de dos mil seis, quien ratificó su declaración ministerial de dos de octubre de dos mil cinco; a preguntas del defensor particular manifestó que en un vehículo oficial, tipo pick-up, dodge Ram, color blanco, sin recordar las placas de circulación, se retiraron de las instalaciones de la agencia Federal de Investigaciones el día veintinueve de septiembre de dos mil cinco, en la noche, después de haber solicitado autorización para retirarse a trabajar; ***** tenía asignado un vehículo oficial, tipo pick-up, Silverado, color arena; la razón por la que el día veintinueve de septiembre de ese año, no utilizaron el vehículo Silverado, color arena, para retirarse del lugar, fue porque estaba descompuesto de una rotula; desde que se retiraron de las instalaciones de la agencia federal de investigaciones, hasta que llegó a su domicilio el día veintinueve de septiembre entre las veintidós o veintidós quince horas, siempre estuvieron físicamente juntos el compareciente y ***** , aproximadamente a esa hora llegó a su domicilio; generalmente al trasladarse de su domicilio a las instalaciones de la agencia federal de investigaciones cuando era necesario estar al pase de lista en el turno diurno, lo llevaba su esposa; no sabe si el vehículo Silverado, color arena, fue reparado; las instalaciones de la UMAN están ubicadas dentro

de la estación Babícora de Seguridad Pública, no recordó el domicilio, la delegación se encuentra ubicada en avenida Lincoln 820, y Hermanos Escobar, fraccionamiento La Playa; las funciones como agente federal son cumplir mandamiento judiciales y ministeriales, en septiembre veintinueve del año próximo pasado estaba adscrito a la UMAN, era su centro de trabajo donde se tenían que hacer todas las puestas a disposición.

A preguntas del agente del Ministerio Público de la Federación dijo que en relación a su declaración ministerial, cuando refiere que en fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco, aproximadamente a las veintiún horas salió de las instalaciones de la agencia federal de investigaciones, a ubicar un domicilio, precisamente el marcado con el número 3622, de la calle Estación Gallegos, en la colonia Satélite, estuvo en dicho lugar como veinte minutos, tardaron porque estaba oscuro, batallaron a localizar el número, asimismo, tenían las características del inmueble para su posible ubicación, porque todavía no sabían si existía; las personas que se percataron que ***** les prestó la camioneta marca Dodge, Ram, color blanco, desde aproximadamente las doce del día, fue el encargado del libro de gobierno del servicio de guardia de agentes, no recordó quien era, éste se dio cuenta que les entregó las llaves; de veinte a veinticinco minutos aproximadamente hicieron del traslado del domicilio que ubicaron en fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco, con motivo del mandamiento ministerial, hasta su domicilio al que lo llevó *****; éste le mencionó que se iba a descansar a su domicilio cuando lo llevó a su domicilio; desconoce el lugar en que se encontraba la camioneta asignada a *****, en la noche del veintinueve de septiembre de dos mil cinco, solo sabía que estaba descompuesta; el treinta de septiembre de ese año, aproximadamente a las diez treinta de la mañana, fueron él y ***** a sacar las placas fotográficas del domicilio ubicado el día anterior; después del pase de lista, dan instrucciones y sale

a trabajar, y no pudo especificar las personas que se percataron que el treinta de septiembre de dos mil cinco, aproximadamente a las diez treinta horas fueron a sacar placas fotográficas; el treinta de septiembre de ese año, inmediatamente después del pase de lista, junto con *****, salió en un vehículo oficial, tipo pick-up, color blanco, Dodge Ram, sin recordar las placas de circulación; no recordó cuando y a qué hora le entregaron a su compañero ***** el vehículo que les prestó, la camioneta marca dodge, Ram, color blanco, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco; el veintinueve estuvo de guardia *****, y el treinta no supo en qué vehículo realizó sus labores, estaba franco por el servicio de la guardia (fojas 579 y 580).

kk). Testimonial de ***** de cinco de mayo de dos mil seis, quien a preguntas del defensor particular manifestó recordar que alguna vez ***** le pidió que fuera como testigo en un asunto de la incumbencia de éste, la petición consistió sobre a que hora había llegado Víctor al domicilio donde viven, ubicado en *****, ciertos días, se acordó que le dijo eso un lunes, y el martes le dijo que había presentado algunos papeles, y a lo mejor lo llamaban; se acordó que día llegó *****, el jueves, porque le abrió el portón, entre diez y media y once, porque veía las noticias; a preguntas del agente del Ministerio Público de la Federación señaló, no recordó que fecha fue aquél jueves que refirió, cuando le abrió el portón a *****; en una camioneta blanca, Dodge, llegó al domicilio ***** el referido jueves, fue en la noche; la camioneta blanca, Dodge, que refiere, es el mismo vehículo en que ***** llegaba todos los días a su domicilio, también traía una color arena, Chevrolet; no recordó las características del vehículo color arena que refirió, era un solo color, cabina sencilla; no recordó cuándo fue la última vez que vio que ***** llegó a su domicilio en el vehículo color arena; no recordó cuántos días antes del jueves, llegó ***** a su domicilio con la camioneta blanca citada; el viernes siguiente por la mañana ***** salió de su

domicilio en la camioneta blanca, en la dodge; aproximadamente antes de las nueve de la mañana salió de su domicilio ***** en la camioneta blanca; ***** no salió de su domicilio posterior a la hora de llegada aquel jueves, hasta la hora en que menciona que lo vio salir en la camioneta blanca ya el viernes por la mañana; se encontraba en la cocina aquella noche del jueves veía las noticias, y cuando llegó Víctor le pitó y salió abrir el portón y en la mañana del viernes estaba almorzando, dijo “ya me voy” y salió abrir el portón, otra vez (fojas 581 y 582).

II). Testimonial de ***** de cinco de mayo de dos mil seis, quien manifestó ratificar sus declaraciones de treinta de septiembre de dos mil cinco y tres de octubre de dos mil cinco; aclaró que respecto a lo que viene en la foja trece del original de la causa, en el sentido que manifiesto textualmente *“que reconoce sin temor a equivocarse, a los agentes de nombre ***** , como las mismas personas que le pidieron dinero y lo privaron de su libertad”*, eso no lo dijo, lo que dijo es que más o menos se parecían, no exactamente, porque ese día andaba asustado; a preguntas del defensor particular manifestó que los hechos que dieron origen al presente proceso iniciaron como a las diez veinte de la noche, para ir a meter a su “chavito” ***** a la casa, caminó a la esquina para buscar a su “chavo” se dieron como las diez y media de la noche; llegó a las oficinas de la Delegación de la Procuraduría General de la República, a presentar su denuncia como a las once de la mañana, del día siguiente; de las seis personas que intervinieron en los hechos que denunció, se refirió como los que más se parecían a las dos personas que lo detuvieron, a los de la camioneta con quien más platicó; durante sus comparecencias en averiguación previa, no le presentaron físicamente a las personas que por medio de fotografías había manifestado que eran los que más se parecían, los pidió, pero no se los presentaron; a petición de la defensa al mostrarle a ***** el indiciado ***** y preguntar si éste es la misma persona que interviniera en los hechos en los que fuera privado de su libertad

y que denunciara, si es la persona que lo privó de su libertad y lo vejó, entre otras cosas, manifestó que aquél no es, el otro era más fornido y poco más alto, porque cuando lo agarró de la mano, sintió el apretón; a petición del testigo solicitó que el indiciado manifestara algunas palabras para escuchar su voz, a lo que se le solicitó ***** dijera su nombre, por lo que el compareciente señaló que la voz de la persona que lo detuvo era más grave, como de una persona más adulta; también se fijó que cuando escribió lo hacía con la mano izquierda.

A preguntas de la agente del Ministerio Público de la Federación señaló que las personas que estuvieron con él precisamente el día treinta de septiembre de dos mil cinco, al rendir su declaración dentro de las oficinas de la Delegación de la Procuraduría General de la República ante el Ministerio Público de la Federación estaba una señorita delgada, pelo corto, que escribía, había más gente como dos personas más, pero no recordó bien por que fue hace mucho; el tres de octubre de dos mil cinco, al rendir nuevamente declaración ministerial, no se le puso a la vista algún álbum fotográfico en el que se basara para referir en su respuesta séptima de las preguntas especiales hechas por el Ministerio Público de la Federación al decir que la persona que le pidió la cantidad de tres mil dólares, fue el que al parecer se parece a ***** y los cuales según su dicho serían entregados en día viernes treinta en el negocio denominado “la Taquiza”; el los pidió para identificar bien, tenían un álbum pero no se lo enseñaron bien, solo lo hojearon pero no lo alcanzó a ver, solicitó nuevamente que se los presentaran en persona pero no se los llevaron, se basó en la primera declaración que fue cuando dijo que al parecer era el que más se parecía; antes de firmar tanto su primera declaración del treinta de septiembre como la del tres de octubre de ese año, no les dio previa lectura nada más las firmó, pues las imprimieron, y le dijeron que era todo, y nada más las firmó; la distancia del lugar dónde refiere que lo subieron a la camioneta y le pegaron, al lugar donde se encontraba su hijo ***** en la puerta de su

casa eran como seis o siete metros aproximadamente; el tiempo que transcurrió desde el momento en que refiere que lo subieron a la camioneta lo golpearon hasta el momento en que se retiraron del lugar donde su hijo de nombre ***** observaba los hechos, fue rápido, no fue mucho, no traía reloj, lo subieron y se fueron; refiere que no fue mucho tiempo el que transcurrió cuando lo subieron a un vehículo y se fueron, porque cuando llegó la Silverado a la esquina, ellos llegaron y lo jalaron, cree que con el ruido fue que Obed abrió la puerta y lo observó, luego de ahí lo subieron a la camioneta; ya cuando iba la camioneta andando fue cuando le pegó el chavo (fojas 583 y 584).

mm). Testimonial de ***** de cinco de mayo de dos mil seis, quien manifestó ratificar su declaración de treinta de septiembre de dos mil cinco; a preguntas del defensor particular manifestó que los vehículos se retiraron del lugar de los hechos en los que refiere se fueron del frente de su domicilio cuando detuvieron a su papá ***** eran dos, una troca color gris, y un carro color claro como azul, como era de noche no se veía bien; no volteó a ver el carro color claro como azul, porque ponía atención a su papá; no vio personas a bordo de una camioneta color gris.

A preguntas de la fiscal federal manifestó no recordar muy bien, la media filiación de las personas que reconoce sin temor a equivocarse y que menciona en su comparecencia de treinta de septiembre de dos mil cinco, como ***** que son las mismas personas que llegaron hasta su domicilio en compañía de su padre ***** por que cuando le enseñaron el álbum su papá dijo que eran los más parecidos, y por eso lo manifestó así; la distancia que se encontraba del lugar donde observó a su padre ***** en compañía de dos persona más, la noche del veintinueve de septiembre de dos mil cinco, aproximadamente tres metros; la complexión y/o estatura de la persona que refiere agarraba a su padre por la parte de la cintura, mismo al que escuchó diciendo *“no te hagas baboso dime donde está el clavo”*, estaba alto, como rellenito, voz ronca,

muy grave; no vio el número de placas de la camioneta color gris, que se encontraba estacionada enfrente de su casa, el veintinueve de septiembre de dos mil cinco.

Nuevamente a preguntas del defensor particular señaló que durante su comparecencia en averiguación previa, no le presentaron físicamente a las personas que por medio de fotografías había manifestado que eran los que más se parecían; al tener a la vista a *****, señaló no es la misma persona que intervino en los hechos en los que fuera privado de su libertad *****, no es quien privó de su libertad y vejó a su padre (fojas 585 y 586).

nn). Careos constitucionales entre **Víctor Alberto Guerrero Acevedo** y Salvador Lira Ayala de cinco de mayo de dos mil seis; el testigo ratificó todas sus declaraciones y aclaraciones rendidas en autos; manifestó nunca había visto a su careado, hasta ese día; el indiciado ratificó sus declaraciones rendidas en autos, manifestó que nunca había visto a su careado, era la primera vez; a preguntas del inculpado al testigo, éste contestó que su careado no es una de las personas que participó en los hechos del veintinueve de septiembre de dos mil cinco (fojas 587).

ññ). Careos constitucionales entre ***** de cinco de mayo de dos mil seis; el testigo ratificó sus declaraciones rendidas en autos; manifestó nunca había visto a su careado, hasta ese día; el indiciado ratificó sus declaraciones rendidas en autos, manifestó que nunca había visto a su careado, era la primera vez; a preguntas del inculpado al testigo, éste contestó que su careado no es una de las personas que vio cerca de su padre el veintinueve de septiembre de dos mil cinco (foja 588).

oo). Escrito de alegatos, signado por el defensor particular, presentado en este juzgado el seis de mayo de dos mil seis (fojas 589 y 590).

pp). Oficio *****, de cuatro de mayo de dos mil seis, signado por el Subdelegado Administrativo Estatal de la Delegación Estatal Chihuahua de la Procuraduría General de la

República; en el que informa que el parque vehicular con el que cuenta esa dependencia en esta ciudad es de treinta y nueve vehículos oficiales, anexó al efecto una relación que especifica la marca, tipo, número de serie, motor, placas, modelo, color y ubicación de cada uno de ellos; asimismo, informa que la asignación de dichos vehículos a los diferentes departamentos se hace a través de resguardos internos emitidos por la subdelegación administrativa, la cual se firma de conformidad la recepción del vehículo por el titular del departamento (fojas 635 y 636).

qq). Ficha signalética y media filiación de *****, remitido por el director del Centro de Readaptación Social de esta ciudad, de la que se desprende que no tiene antecedente penal en ese reclusorio (fojas 638 y 639).

rr). Oficio del agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien manifestó que en los archivos de esa dependencia no se encontraron antecedentes penales a nombre de ***** (foja 652).

ss). Telegrama remitido por el jefe del Departamento de Registro de Sentenciados, en el que informa que ***** no tiene registrado antecedentes penales en esa dependencia (foja 667).

tt). Diligencia de compulsas y cotejo de siete de junio de dos mil seis, practicada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, quien asentó que se constituyó en la Jefatura Regional de la Agencia Federal de Investigaciones, fue atendido por *****, al estar en la bodega administrativa y tener un lejano correspondiente al año dos mil cinco, se le puso a la vista la lista de asistencia de veintinueve de septiembre de dos mil cinco, al cotejarla con la copia que obra a foja cuatrocientos diez de los autos originales de la causa, se dio fe que en la tercera página, tercer reglón, coincide en todo con el original de la lista que tuvo a la vista.

Posteriormente, se constituyó física y legalmente en las oficinas de la Dirección local del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue atendido por el subdirector *****, quien le puso a la vista la constancia de atención médica en urgencias del primero de octubre de dos mil cinco, folio 10532, efectuada a *****, la que al ser cotejada y compulsada con la copia que obra a foja cuatrocientos trece de los autos originales de la causa, se dio fe de que no son idénticas, ya que el original está elaborado en papel membretado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero en cuanto a su contenido coinciden en todo, quien atendió proporcionó una copia simple del original, misma que se agregó a la diligencia.

Del estudio de la copia proporcionada, se advierte en su parte posterior que se realizó una nota, que textualmente dice: *“Paciente q’ de forma abierta refiere q’ acudió para solicitar incapacidad, no refiere enfermedad y ofrece dinero a personal administrativo se informa situación a ***** a las 18:45”* (fojas 673 y 674).

uu). Documentales consistentes en seis cartas de recomendación y buena conducta a favor de ***** (fojas 898 a 902 y 904).

vv). Documental signada por el Comandante de Seguridad y Vigilancia, del Centro de Readaptación Social Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que informa que el interno de nombre ***** no se le encontró conducta negativa dentro de ese centro penitenciario (foja 903).

TERCERA. Para determinar el sentido en que debe resolverse este juicio penal, es decir si debe ser mediante una sentencia condenatoria o una absolutoria y, en su caso, la pena que corresponda de acuerdo al grado de participación de los agentes, y si la conducta es dolosa o culposa, debe quedar perfectamente establecido si se dio o no en la realidad las conductas típicas materia del ejercicio de la acción penal; y en caso de que así sea, si le es atribuible al acusado esas conductas (responsabilidad) y en qué grado de participación dolosa o culposa, como autor o partícipe.

Entonces, es necesario prever cómo describe la ley a los delitos por los que se ejerció la acción penal a fin de estar en posibilidad de verificar que todos los elementos que enlazan esa descripción, se actualizan en el caso de que se trata.

Para esclarecer el segundo supuesto es necesario verificar que existan pruebas de las cuales se deduce la participación del acusado en los delitos, la comisión dolosa o culposa, que no existe acreditada a su favor alguna causa de licitud y no se acredita excluyente alguna del delito.

CUARTA. Acreditación del cuerpo del delito de abuso de autoridad.

El numeral 215, fracción II, y penúltimo párrafo, del Código Penal Federal establece:

“Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes: (...)

II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare (...)

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII (...).”

La corporeidad del antijurídico de **abuso de autoridad**, previsto en el precepto 215, fracción II, del Código Penal Federal y sancionado en el penúltimo párrafo del mismo ordinal, se compone de los siguientes elementos:

a). El sujeto activo sea un servidor público o agente del gobierno o comisionado, cualquiera que fuera su categoría;

b). En ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare.

En el caso se requiere como materialidad del hecho que la ley señala como delito de abuso de autoridad, una actividad voluntaria final del sujeto activo, la cual se traduce en ejercer violencia contra un tercero sin causa legítima, vejarlo o insultarlo.

El bien jurídico tutelado es la debida actuación de los

servidores públicos, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, pues se intenta regular sus actuaciones a fin de que no se extralimiten en su ejercicio.

La descripción típica requiera calidad específica del sujeto activo pues se trata de servidor público en ejercicio de sus funciones; resultando que recae dicha figura en los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones.

No así del sujeto pasivo, pues cualquier persona puede verse afectado.

El resultado es de carácter material ya que con su comisión se efectúa cambio o mutación en el mundo exterior.

La descripción típica requiere como elementos normativos las expresiones semánticas de *abusar y autoridad*, el primero de ellos a su vez constituye la conducta núcleo del tipo y se traduce en excederse en el ejercicio de una función que legalmente puede practicar un servidor público.

Por su parte, por autoridad se entiende la facultad que tiene un servidor público para hacer cumplir las disposiciones que en ejercicio de su servicio emita, esto es, el poder de hacer cumplir sus órdenes a efecto de que el servicio público sea prestado adecuadamente.

La atribución de la autoridad es en función del servicio y se debe ejercer precisamente en relación a éste; cualquier desviación del poder otorgado implica su abuso, una conducta que desvirtúa los fines para los que se atribuye autoridad y que rebasa los límites legales del mando que se tiene.

El abuso de autoridad se caracteriza por el ejercicio arbitrario, extralimitado y excesivo de las facultades que se le confieren al servidor público, en función de fines e intereses ajenos al servicio y en perjuicio del mismo.

Sin que el delito en estudio, considerado en abstracto, exija circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; no obstante, éstas se precisan con objeto de determinar si la conducta reprochada actualiza o no el tipo legal o materialidad de la acusación.

El primer elemento, que el sujeto activo sea un servidor público o agente del gobierno o comisionado, cualquiera que fuera su categoría se acredita con la declaración ministerial, ratificada ante este juzgado, de *****, quien manifestó se desempeñaba en la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República como Supervisor Operativo, sin embargo, se encontraba encargado de la Jefatura Regional los días dos, tres y cuatro de octubre del dos mil cinco; desconoce los hechos que se señalan en la nota periodística visible a foja cuatro de la presente indagatoria; por orden del agente del Ministerio Público, ningún agente Federal de Investigaciones abandonó las instalaciones de la delegación, una vez reunidos los agentes federales, una persona del sexo masculino que había denunciado unos hechos, se paró enfrente de todos los que estaban formados, y manifestó no reconocer a nadie, que las personas que había reconocido los había visto en las escaleras internas de la delegación, cuando ingresó; se le ordenó localizar y presentar a los Agentes Federales de Investigación *****, adscritos a esta jefatura regional y comisionados a la Unidad Mixta de Atención a Narcomenudeo, se trasladó a la UMAN, en donde se les informó que los elementos a localizar no se habían reportado; se dirigieron a los domicilios de los requeridos, no los encontraron; el día veintinueve de septiembre actual, se presentaron los dos agentes federales (*****) poco antes de las veintiuna horas, solicitaron autorización para retirarse ya que tenían mandamiento ministerial, se autorizó la salida, firmó la lista de asistencia solo Gabriel Durán y a falta de la firma de ***** se puso R/T, que significa reportó trabajando; el día viernes treinta de septiembre de dos mil cinco, en el pase de lista a las nueve horas firmaron Gabriel Durán y *****, pero no se presentaron a las veintiuna horas; el día sábado no se presentaron a laborar, ni se reportaron vía telefónica, desconoce el motivo de su inasistencia; por la mañana del dos de octubre de dos mil cinco, se reportaron vía telefónica con el agente Mario Padilla; el

veintinueve de septiembre del año en curso ***** no informaron que tuvieran alguna investigación especial.

Declaración la cual adquiere valor de indicio, en términos del dispositivo legal 285, del Código Federal de Procedimientos Penales.

Asimismo, se cuenta con el álbum fotográfico de agentes Federales de Investigación adscritos a la agencia de la Unidad Mixta para la atención del narcomenudeo en Ciudad Juárez, Chihuahua (UMAN), en el cual aparece la fotografía de ***** en primer término (foja treinta y dos).

Documental que tiene valor de indicio al tenor de los numerales 206 y 285, del código adjetivo penal federal.

Se considera, el criterio de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página ciento veintisiete, Tomo 217-228 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con los siguientes rubro y texto:

“FOTOGRAFÍAS. ADMINICULADAS CON UNA PRUEBA TESTIMONIAL NO SOLO PRUEBAN UN HECHO AISLADO. Si bien las fotografías sólo reflejan hechos aislados, cuando se vinculan con una prueba testimonial se les puede otorgar un mayor valor probatorio que el relativo al hecho aislado que en ellas aparece”.

También consta copia certificada del oficio JRAT/972/2005 de dos de agosto de dos mil cinco, signado por el supervisor operativo de la Agencia Federal de Investigaciones, en el que comisiona a ***** , agente federal investigador, como encargado del servicio a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, y recibido por aquél el dos de agosto de ese año (foja 197).

Documental que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 280 del Código Federal de Procedimientos Penales, adquiere eficacia probatoria para acreditar el extremo que se pretende, con valor probatorio pleno, esto es, que ***** , al veintinueve de septiembre de dos mil cinco, tenía el carácter de servidor público, como agente federal de investigaciones adscrito a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis XX. 303 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página doscientos veintisiete, Tomo XV, Enero 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del literal siguiente:

“DOCUMENTO PUBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él”.

Asimismo, obra en autos la declaración ministerial, ratificada en preparatoria, de *****, quien al momento de la diligencia se identificó con gafete administrativo número 214365, expedido a su favor por la Procuraduría General de la República, además que al referir sobre sus generales manifestó ser empleado federal.

Probanza que de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo legal 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene valor de indicio para acreditar el carácter de funcionario público que ostentaba el acusado.

Pruebas que adminiculadas entre sí, integran prueba circunstancial, conforme al arábigo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, para acreditar que efectivamente ***** se desempeñaba como agente Federal de Investigación en la Delegación de la Procuraduría General de la República en esta ciudad, y al día que ocurrieron los hechos delictivos cuya comisión se le imputa detentaba tal carácter.

Se considera para ello la tesis1a./J. 22/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento setenta y uno, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:

“ABUSO DE AUTORIDAD, EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO DE, NO PUEDE ACREDITARSE EXCLUSIVAMENTE CON LA CONSTANCIA DEL NOMBRAMIENTO. Tratándose de aquellos delitos como el de abuso de autoridad, para cuya actualización no se requiere prueba especial, según lo disponen los códigos adjetivos de San Luis Potosí, Sinaloa y Nayarit, se sigue el sistema de no limitar taxativamente la prueba, en donde la decisión del Juez no está determinada por reglas más o menos rígidas que lo

obliguen a estimar cierto lo demostrado por pruebas determinadas, sino que opera el arbitrio judicial, para la libre apreciación de las pruebas, por lo que, para tener por acreditado el carácter de servidor público como elemento del tipo del ilícito aludido, no sólo se logra mediante el nombramiento con tal carácter del sujeto activo o la constancia que así lo compruebe, en virtud de que el juzgador tiene que hacer uso de la facultad más importante dentro de su tarea de administrar pública justicia, consistente en la actividad intelectual que despliega al efectuar la valoración de la prueba, a la luz de la regla genérica que contemplan los códigos de procedimientos penales invocados, en el sentido de que el Juez goza de la más amplia libertad para valerse de todos los medios lícitos de investigación, lo que se traduce en que, para tener por comprobado el referido extremo, la autoridad judicial se puede allegar cualquier elemento de convicción, siempre y cuando no sean contrarios a derecho, ni reprobados por la ley”.

Así también, apoya la tesis1a./J. 21/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento noventa y cinco, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto exponen:

“ABUSO DE AUTORIDAD, EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO DE, SE PUEDE PRESUMIR MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. *Mediante la prueba circunstancial se puede inferir el carácter de funcionario o servidor público, como elemento del tipo penal del ilícito de abuso de autoridad, cuando, como en la especie, los ordenamientos adjetivos penales de los Estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Nayarit autorizan al Juez para considerar cierto un hecho si existe prueba de indicios, además de que tienen adoptado el sistema de arbitrio judicial para la libre apreciación de la prueba, puesto que, de acuerdo a este sistema, no se limita taxativamente la prueba, sino que deja a la autoridad judicial la libertad de allegarse toda clase de elementos de convicción, siempre y cuando no vayan en contra de la moral y de las buenas costumbres, lo que implica que el juzgador, ciñéndose a esas amplias facultades, podrá tener por acreditado el mencionado elemento del delito, al tomar en conjunto todas esas probanzas e integrar la prueba circunstancial, llamada prueba de indicios, en donde cada uno de ellos, si bien en forma autónoma y aislada no tienen mayor valor, en su conjunto puedan adquirir eficacia probatoria plena, por relacionarse y vincularse lógicamente entre sí para crear absoluta convicción, sin olvidar que la prueba circunstancial precisa para su integración que se encuentren acreditados los hechos indiciarios y que exista un enlace más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de ahí que la apreciación que de las pruebas haga el Juez en los términos aludidos, aparte de que se ajusta a las reglas tutelares que rigen la prueba en materia penal porque conforme lo dispone la ley se valora la prueba circunstancial, sirve para presumir la materialidad del delito de abuso de autoridad”.*

El segundo elemento integrativo de la materialidad del tipo penal en estudio, refiere dos supuestos, en primer lugar, lo relacionado al ejercicio de funciones o con motivo de ellas; carácter que debe revestir la conducta del sujeto activo del

delito, lo que en el presente asunto debe tenerse por acreditado con las probanzas que obran en el expediente, relatadas en la consideración precedente, pues de lo expuesto por *****, cuya eficacia probatoria es de indicio, en términos del artículo 285, del Código Federal de Procedimientos Penales, se advierte que el sujeto activo del delito, el día veintinueve de septiembre de dos mil cinco, antes de las veintiuna horas, solicitó, junto con su compañero *****, autorización para retirarse ya que tenían mandamiento ministerial, por lo que se autorizó la salida, ya que, al parecer, tenían mandamiento ministerial; y que el propio activo no se presentó a la firma de las veintiún horas; lo que adquiere carácter de indicio en términos del numeral 285 del código adjetivo federal de la materia.

Sin que sea inadvertido que aunque el justiciable dijo que sí se reportó (en su declaración que rindió por escrito) no hay medio de prueba apto alguno que corrobore tal aserto; y, en cambio si puede constatarse en la documental relativa a la lista de asistencia el personal adscrito a la Jefatura Regional de la Agencia Federal de Investigación, de fecha veintinueve de septiembre dos mil cinco, la falta de firma de aquél, en el espacio relativo a las veintiún horas; lo que se comprobó con la diligencia de compulsas y cotejo realizada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional (fojas 673 y 674), la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispone el artículo 284 del código adjetivo federal de la materia, toda vez que la realizó un funcionario federal dotado de fe pública.

En soporte a tal postura se invoca la tesis IV.2o. J/4, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página doscientos sesenta y cinco, Tomo I, Mayo de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:

“NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la

persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario”.

Tampoco se desatiende que el agente *****, en testimonial ante este órgano jurisdiccional el cuatro de mayo actual, a preguntas del encausado dijo que ***** sí se encontraba físicamente en el pase de lista el veintinueve de septiembre de dos mil cinco; sin embargo, tal posición se contrapone con su primigenia versión al afirmar que momentos antes de las veintiún horas, solicitaron autorización para retirarse ***** y ***** ya que tenían mandamiento ministerial, y sólo firmó Gabriel Durán, no así *****, por lo que se asentó en su espacio “R/T”, que significa reportó trabajando. Luego, no se torna lógico que si aquél estaba en ese momento (como pretende evidenciarlo ***** en su intervención ante este juzgado), la lista de asistencia no solo carezca de su firma, sino que se asentara que “se reportó trabajando”; máxime que en deposición ministerial de dos de octubre de dos mil cinco, ***** apuntó que ***** no informaron que tuvieran alguna investigación especial, lo que pone en entredicho sus afirmaciones.

Aunado a lo anterior, se alza que los hechos denunciados por ***** se suscitaron aproximadamente a las diez horas con treinta minutos, lo que dista en una hora y media del pase de lista de esa fecha, tiempo en el cual no fue visto por ***** y que, por ello, se pudo aprovechar para realizar la actividad ilícita imputada.

Así, es que a la testimonial de ***** es de no otorgarle valor probatorio, con base a lo establecido en el numeral 289, fracción III, del código adjetivo de la materia, pues no conoció el hecho reclamado, por lo que se considera su deposición como de coartada, con el propósito de beneficiar al imputado.

Apoya a lo anterior la tesis VI.1o.P. J/19, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuarenta y siete, Tomo XIV, Octubre

de 2001, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son:

“TESTIGOS DE COARTADA. *Tratándose de testigos de coartada, para que sean tomadas en cuenta sus declaraciones, deben de manifestar de momento a momento la conducta desplegada por el acusado, pues si no es así, pudiera darse el caso de que aquél haya aprovechado el momento no cubierto por los testimonios para cometer el delito”.*

Por otro lado, obra la declaración ministerial de *****, ratificada en ampliación de la misma, como en este juzgado, quien manifestó que como a las diez treinta de la noche del veintinueve de septiembre de dos mil cinco, al salir a buscar a uno de sus hijos, de nombre *****, llegó un carro con cuatro personas, dos hombres se bajaron del vehículo y le preguntaron si sabía dónde vendían droga, les contestó no saber, uno de ellos, le dijo *“ya te chingamos traemos lo que estás vendiendo”*, en eso llegó una camioneta Silverado con dos personas a bordo y lo subieron a ella y lo golpearon, en eso vio que su hijo ***** estaba parado en la puerta de su casa observaba lo que sucedía, los agentes le preguntaban quien le vendía la droga, que ya tenían un comprador, luego lo llevaron al Oxxo que se encuentra en la entrada de “Riveras del Bravo” con un muchacho a quien supuestamente le había vendido droga, le pegaron los agentes porque él dijo que no lo conocía; lo llevaron al estacionamiento de las oficinas a bordo de la camioneta gris, donde lo esculcaron, le pidieron su identificación, le quitaron un gafete de trabajo y cien pesos moneda nacional, uno de ellos le dijo que si les ponía el “dedo” le iban a dar “piso”, uno chaparro, de cabello corto, tipo “chilango”, delgado, le dijo le entregara tres mil dólares el treinta de septiembre al medio día, lo subieron de nuevo a la camioneta y lo llevaron a unos taxis por esa zona, uno de ellos se comunicó con un licenciado, le dijo que lo iban a consignar y que podían solicitar una orden de cateo y que si no le encontraban nada ellos mismos le iban a poner la droga, luego le dijeron que se fuera a su casa; el otro agente es moreno, cachetón, de un metro setenta centímetros de estatura, cabello abultado negro; agregó que cuando llegó a esas oficinas

(Delegación de la Procuraduría General de la República) el día siguiente, en el estacionamiento ubicó la camioneta gris Silverado, y al subir las escaleras del edificio identificó a los agentes que le pidieron dinero, como los dos que tripulaban el vehículo Silverado; la Representación Social de la Federación y un perito en fotografía, en compañía del de la voz se constituyeron en el estacionamiento de la Procuraduría General de la República y este último identificó el vehículo marca Chevrolet, tipo pick-up, Silverado 2500, color gris, placas de circulación DB76-268 como el mismo que traía los agentes que le pidieron dinero; al tener a la vista el álbum fotográfico del personal adscrito a la Agencia Federal Investigadora, así como de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscrito a esa Delegación Estatal Chihuahua, manifestó reconocer sin temor a equivocarse a los agentes de nombres *****, como quienes le pidieron dinero y lo privaron de su libertad.

Testimonial que reúne los requisitos que para concederle eficacia probatoria exige el dispositivo legal 289, del código adjetivo penal federal, ya que se rindió por persona que por su edad, pues cuenta con treinta y seis años, capacidad e instrucción tiene el criterio necesario para juzgar el acto, por su probidad e independencia de posición y antecedentes personales, tiene completa imparcialidad, el hecho de que se trata lo conoció por medio de los sentidos, por si mismo y no por inducciones ni referencias de otro, su declaración es clara y precisa, sin dudas, ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho y sobre sus circunstancias esenciales y no se observa que haya sido obligado a declarar por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno.

Máxime que se trata del propio ofendido el que, cuya declaración, en delitos de realización verificada en ausencia de testigos, jurisprudencialmente se ha sostenido, adquiere validez preponderante.

Criterio que esta resolutora estima aplicable, virtud a que los hechos denunciados si bien se verificaron en la vía pública,

por razón de la hora y la mecánica en que se desarrollaron, influye para considerarse verosímil lo expuesto por el ofendido.

Aplica a lo expuesto la tesis II.2o. J/8, del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página cincuenta y uno, Tomo 70, Octubre de 1993, Octava Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del literal siguiente:

“OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL. *Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la investigación judicial, el examen de la víctima, de la infracción. En estas condiciones, la prueba de responsabilidad de determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi siempre en la ausencia de testigos, se dificultaría sobre manera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concedía crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario por si sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante”.*

Asimismo, se cuenta con lo expuesto por *****, quien ante el agente del Ministerio Público de la Federación, y ratificado en este juzgado federal, manifestó que aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, del veintinueve de septiembre de dos mil cinco, se encontraba en el interior de su domicilio, escuchó que azotaron la puerta principal de su casa, al acudir al lugar la abrió y vio que se encontraban dos tipos uno de ellos agarraba a su padre ***** de la camisa por la parte de la cintura y le preguntaba “dónde estaba el clavo” su padre le contestaba no saber; dijo a su padre que se lo llevarían, sin decir a donde, los dos tipos lo subieron a una camioneta color gris, estacionada frente a su casa y se lo llevaron; salió a buscar a su padre a estación Aldama donde les informaron no saber nada, su hermano Eliu le habló a su celular, le dijo le llamó su papá que ya iba rumbo a su casa, por lo que se regresó y su papá ya estaba ahí, le platicó que una de las personas que se lo llevó lo había golpeado y le pidió treinta mil pesos pero en moneda americana por dejarlo ir; al tener a la vista el vehículo pick-up silverado color gris, con placas de circulación 76-268 manifestó que si se parece pero no está

seguro que sea la misma camioneta que estaba afuera de su casa y en la cual se llevaron a su padre; al tener a la vista el álbum fotográfico del personal adscrito a la Agencia Federal Investigadora y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subdelegación Estatal en Chihuahua, manifestó reconocer sin temor a equivocarse a *****, como las mismas personas que llegaron a su domicilio y se llevaron a su padre; a preguntas de la defensa respondió que sólo escuchó que uno de los tipos dijo a su padre “te vamos a llevar para allá” y que el tipo de palabras que utilizaron con su papá fueron “baboso y guey”.

Testimonial que tiene valor de indicio de conformidad con lo expuesto en el numeral 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, además que el hecho lo conoció por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro, su declaración es clara y precisa, sin dudas, ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho y sobre sus circunstancias esenciales y no se observa que haya sido obligado a declarar por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno.

En soporte a tal postura se invoca la tesis VI.2o. J/149, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página mil ochenta y dos, Tomo VIII, Octubre de 1998, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

“TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN.

La minoría de edad del declarante no invalida por sí misma el valor probatorio que a su testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan sido narrados de una manera clara y precisa”.

También adquiere relevancia la jurisprudencia trescientos cincuenta y dos, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página ciento noventa y cinco, Tomo II, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, del literal siguiente:

“TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. *Las declaraciones de quienes atestiguan en proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testimonio subjudice”.*

Así, de lo manifestado *********, se establece que el primero, fue insultado, cuando al ser detenido, le gritaban “*ya te chingamos traemos lo que estás vendiendo*”, que donde estaba “*el clavo*”, que lo agarraban de la camisa, lo insultaban con palabras altisonantes de “*baboso y güey*”, además de que si les “*ponía dedo*” le iban a dar “*piso*” y que si no le encontraban nada, ellos le iban a poner la droga; cuestión que acredita que el aquí acusado, actuó de manera extralimitada y fuera del orden que a su investidura debe recaer como servidor público; máxime que la detención a ********* no se aprecia fuera realizada en flagrancia por comisión de ilícito alguno, o con motivo de mandato de investigación, pues en ese sentido ninguna prueba se rindió.

Además, está acreditado que el sujeto activo del delito era servidor público, en la especie, Agente Federal de Investigación adscrito a la Jefatura Regional de esta plaza y comisionado como encargado de la Unidad Mixta para la Atención al Narcomenudeo, y con motivo de las funciones inherentes al cargo que ostentaba, detuvo e insultó a una persona, sin que por medio alguno legitimara su actuar, utilizó agresiones verbales contra un ciudadano en ejercicio de sus derechos, el que solamente se encontraba parado afuera de su domicilio; debiendo entenderse por insultar, según el Diccionario de Derecho Procesal Penal del jurista Marco Antonio Díaz de León, Editorial Purrua, Tomo I, cuarta edición, del dos mil, página mil doscientos cuarenta y uno, como: “*Ofender a alguien con palabras o acciones*”.

Por tanto, se acredita que el sujeto activo en su calidad de servidor público y con motivo de la misma función, hizo insultos, es decir, ofendió a una persona por medio de

agresiones verbales, como “*baboso y güey*”; y materializó tal circunstancia al detener al propio ofendido *****.

La anterior acción desplegada por el sujeto activo fue realizada sin causa legítima, puesto que no se desprende que precediera la existencia de un mandato de autoridad competente, por el que justificara el actuar y su proceder, provocando con esto la lesión al bien jurídico que tutela este tipo penal, es decir, el correcto actuar del servidor público.

Así, la propia denuncia formulada por *****, la cual fue debidamente ratificada ante la autoridad investigadora y en la cual manifiesta haber sido agredido sin causa legítima, por parte de un elemento de la Agencia Federal de Investigaciones; adquiere valor de indicio, en términos del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, y se adminicula a su vez con el depurado emitido por *****, quien presenció cuando su padre *****, fue objeto de agresiones verbales sobre su persona, traducidos como insultos, realizados por personal de una corporación policiaca; el cual también adquiere la eficacia probatoria de indicio al tenor de lo dispuesto por el numeral 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, los que en su conjunto adquieren eficacia probatoria plena, al integrar prueba circunstancial, en términos del lo expuesto por el precepto 286 de la codificación en cita.

En la inteligencia que ante este órgano jurisdiccional tanto el ofendido como su hijo (Salvador Lira Ayala y Obed Eduardo Lira Rodríguez, respectivamente) ratificaron el aspecto medular de su denuncia, esto es, los hechos que expusieron, como se desprende del contenido de sus declaraciones de fecha cinco de mayo de dos mil seis.

Luego, los medios de prueba reseñados, razonados silogísticamente, permiten llegar a la verdad por conocer, esto es, que un miembro de la Agencia Federal de Investigaciones, en ejercicio de sus funciones, el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, en las inmediaciones de la calle Rivera de Arroyo, del

fraccionamiento Riveras del Bravo en esta ciudad, y posteriormente en las instalaciones del estacionamiento de la Delegación de la Procuraduría General de la República, insultó y detuvo sin mandamiento judicial, ministerial, orden de investigación alguna o flagrancia a *****, sin justificar su actuar, y restringió la capacidad de este último de oponerse a dicha acción, provocando una agresión a la persona del pasivo, conducta que realizó sin causa legítima, pues no se advierte que existiera un mandato de autoridad competente por el que justificara su actuar, con lo que lesionó el bien jurídico tutelado que es el correcto proceder del servidor público.

En consecuencia, del análisis, en conjunto y concatenados entre sí, de los elementos de prueba, con el valor probatorio asignado a cada uno de ellos en lo individual, integran prueba circunstancial en términos del ordinal 286, del Código Federal de Procedimientos Penales, con valor suficiente para demostrar los elementos de la materialidad del antijurídico que se analiza, cuyo lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, por lo que se acredita la materialidad del delito de **abuso de autoridad**, contemplado en el dispositivo legal 215, fracción II, del Código Penal Federal y sancionado en el penúltimo párrafo del mismo numeral.

Se considera para ello la jurisprudencia seiscientos sesenta y tres, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada a página cuatrocientos quince, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, que señala:

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. *La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado”.*

De igual forma, se invoca la jurisprudencia doscientos setenta y cinco, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas doscientos a doscientos uno, del Apéndice del Semanario Judicial de la federación 1917-2000, Tomo II, correspondiente a la Materia Penal, publicada bajo el siguiente rubro y texto:

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACIÓN DE LA. *La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato para complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado”.*

QUINTA. Acreditación del cuerpo del delito desaparición forzada de personas.

El numeral 215-A del Código Penal Federal, establece:

“Artículo 215-A. *Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.*

Asimismo, la penalidad al delito en comento la establece el precepto 215-B, el que dice:

“Artículo 215-B. *A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión.*

Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por si mismos delitos (...).”.

La corporeidad del antijurídico de **desaparición forzada de personas** en estudio, se compone de los siguientes elementos:

- a). El sujeto activo sea un servidor público;
- b). Sea detenida una persona legal o ilegalmente.
- c). Propicie o mantenga dolosamente el ocultamiento de la persona, bajo cualquier forma de detención.

En el caso se requiere como materialidad del hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de personas, una actividad voluntaria final del sujeto activo, la cual se traduce

en propiciar o mantener dolosamente el ocultamiento de una persona detenida.

El bien jurídico tutelado es la libertad externa de las personas la libertad de obrar y moverse.

La descripción típica requiera calidad específica del sujeto activo pues se trata de servidor público en ejercicio de sus funciones; resultando que recae dicha figura en un agente de la Agencia Federal de Investigaciones.

No así del sujeto pasivo, pues cualquier persona puede verse afectado en su libertad.

El resultado es de carácter material ya que con su comisión se efectúa cambio o mutación en el mundo exterior.

Sin que el delito en estudio, considerado en abstracto, exija circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; no obstante, éstas se precisan con objeto de determinar si la conducta reprochada actualiza o no el tipo legal o materialidad de la acusación.

En la inteligencia que el delito de desaparición forzada de personas es de naturaleza permanente; y se consuma desde el momento de la detención y que se ignore el paradero del ofendido, hasta que éste aparezca o se tenga certeza de su paradero o destino.

Sustenta lo anterior la tesis P./J. 48/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página novecientos sesenta y ocho, Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:

“DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA. El referido delito que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (coincidente con lo previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal), de acuerdo con el derecho positivo mexicano, es de naturaleza permanente o continua, ya que si bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información sobre su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino”.

En virtud de lo anterior, es menester analizar los elementos de la materialidad del delito imputado de la siguiente manera:

El primer elemento del delito citado, que el sujeto activo sea un servidor público; a ello es de apuntar, que como se analizó en la consideración que antecede, y toda vez que también el primer elemento de la configuración del ilícito de **abuso de autoridad**, es el mismo que aquí nos ocupa, para evitar transcripciones innecesarias, se tienen por reproducidos los argumentos y valoraciones jurídicas realizadas líneas anteriores, para con ello acreditar el carácter de servidor público que ostentaba el imputado el día de los acontecimientos que le dieron nacimiento a esta causa penal.

Ahora, el segundo y tercero elementos del tipo penal en estudio, a saber, que una persona sea detenida legal o ilegalmente, y que el activo propicie o mantenga dolosamente el ocultamiento de esa persona, bajo cualquier forma de detención, se acreditan con la declaración ministerial de *****, ratificada en ampliación de la misma ante el fiscal federal, así como ante este órgano jurisdiccional, quien manifestó que como a las diez treinta de la noche del veintinueve de septiembre de dos mil cinco, al salir a buscar a uno de sus hijos, de nombre *****, llegó un carro con cuatro personas, dos hombres se bajaron del vehículo y le preguntaron si sabía dónde vendían droga, les contestó no saber, uno de ellos, le dijo *“ya te chingamos traemos lo que estás vendiendo”*, en eso llegó una camioneta Silverado con dos personas a bordo, lo subieron a ella y lo golpearon, en eso vio que su hijo ***** estaba parado en la puerta de su casa observaba lo que sucedía, los agentes le preguntaban quien le vendía la droga, que ya tenían un comprador, luego lo llevaron al Oxxo que se encuentra en la entrada de “Riveras del Bravo” con un muchacho a quien supuestamente le había vendido droga, le pegaron los agentes porque él dijo que no lo conocía; lo llevaron al estacionamiento de las oficinas

(Delegación de la Procuraduría General de la República) a bordo de la camioneta gris, donde lo esculcaron, le pidieron su identificación, le quitaron un gafete de trabajo y cien pesos moneda nacional, uno de ellos le dijo que si les ponía el “dedo” le iban a dar “piso”, uno era chaparro, cabello corto, tipo “chilango”, delgado, le dijo le entregara tres mil dólares el treinta de septiembre al medio día, lo subieron de nuevo a la camioneta y lo llevaron a unos taxis por esa zona, uno de ellos se comunicó con un licenciado, le dijo que lo iban a consignar y que podían solicitar una orden de cateo y que si no le encontraban nada ellos mismos le iban a poner la droga, luego le dijeron que se fuera a su casa; el otro agente es moreno, cachetón, de un metro setenta centímetros de estatura, cabello abultado negro; agregó que cuando llegó a esas oficinas (Delegación de la Procuraduría General de la República) al día siguiente, en el estacionamiento ubicó la camioneta gris Silverado, y al subir las escaleras del edificio identificó a los agentes que le pidieron dinero, como los dos que tripulaban el vehículo Silverado; el Representante Social de la Federación y un perito en fotografía, en compañía del declarante se constituyeron en el estacionamiento de la Procuraduría General de la República y el último mencionado, identificó el vehículo marca Chevrolet, tipo pick-up, Silverado 2500, color gris, placas de circulación ***** como el mismo que traía los agentes que le pidieron dinero; al tener a la vista el álbum fotográfico del personal adscrito a la Agencia Federal Investigadora, así como de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscrito a esa Delegación Estatal Chihuahua, manifestó reconocer sin temor a equivocarse a los agentes de nombres *****, como quienes le pidieron dinero y lo privaron de su libertad.

Testimonial que adquiere valor probatorio por lo considerado en el numeral 289 del código adjetivo penal federal, ya que se rindió por persona que por su edad, pues cuenta con treinta y seis años, capacidad e instrucción tiene el criterio necesario para juzgar el acto, por su probidad e independencia

de posición y antecedentes personales, tiene completa imparcialidad, el hecho de que se trata lo conoció por medio de los sentidos, por si mismo y no por inducciones ni referencias de otro, su declaración es clara y precisa, sin dudas, ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho y sobre sus circunstancias esenciales y no se observa que haya sido obligado a declarar por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno.

Apoya también el dicho de *****, quien ante el agente del Ministerio Público de la Federación manifestó que aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, del veintinueve de septiembre de dos mil cinco, se encontraba en el interior de su domicilio, escuchó que azotaron la puerta principal de su casa, al acudir al lugar la abrió y vio que se encontraban dos tipos uno de ellos agarraba a su padre ***** de la camisa por la parte de la cintura y le preguntaba “dónde estaba el clavo” su padre le contestaba no saber; dijo a su padre que se lo llevarían, sin decir a donde, los dos tipos lo subieron a una camioneta color gris, estacionada frente a su casa y se lo llevaron; salió a buscar a su padre a estación Aldama donde les informaron no saber nada, su hermano ***** le habló a su celular, le dijo le llamó su papá que ya iba rumbo a su casa, por lo que se regresó y su papá ya estaba ahí, le platicó que una de las personas que se lo llevó lo había golpeado y le pidió treinta mil pesos pero en moneda americana por dejarlo ir; al tener a la vista el vehículo pick-up silverado color gris, con placas de circulación 76-268 manifestó que si se parece pero no esta seguro que sea la misma camioneta que estaba afuera de su casa y en la cual se llevaron a su padre; al tener a la vista el álbum fotográfico del personal adscrito a la Agencia Federal Investigadora y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subdelegación Estatal en Chihuahua, manifestó reconocer sin temor a equivocarse a *****, como las mismas personas que llegaron a su domicilio y se llevaron a su padre; a preguntas de la defensa respondió que sólo escuchó que uno de

los tipos dijo a su padre “*te vamos a llevar para allá*” y que el tipo de palabras que utilizaron con su papá fueron “*baboso y guey*”.

Testimonial que tiene valor de indicio de conformidad con lo expuesto en el numeral 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, además que el hecho lo conoció por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro, su declaración es clara y precisa, sin dudas, ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho y sobre sus circunstancias esenciales y no se observa que haya sido obligado a declarar por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno.

Se apoya lo anterior con la tesis VI.2o. J/149, visible en la página mil ochenta y dos, Tomo VIII, Octubre de 1998, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

“TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN.

La minoría de edad del declarante no invalida por sí misma el valor probatorio que a su testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan sido narrados de una manera clara y precisa”.

También aplica la jurisprudencia trescientos cincuenta y dos, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página ciento noventa y cinco, Tomo II, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, del tenor siguiente:

“TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. *Las declaraciones de quienes atestiguan en proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testimonio subjudice”.*

También es de ponderar la declaración ministerial de ***** , de treinta de septiembre de dos mil cinco, quien manifestó que como a las diez y media de la noche del

veintinueve de septiembre del año en curso se encontraba de guardia, entró al estacionamiento de esas oficinas una camioneta Chevrolet, pick-up, color arena, con seis hombres, se acercó a ver que se les ofrecía le dijeron ser agentes de la AFI, que no pasaba nada, uno de ellos le mostró una identificación del AFI, no se percató del nombre ya que no le quiso prestar la credencial, le dijeron que sólo arreglaban un problema entre ellos que no traían detenidos, se percató que no había nadie esposado estaban cinco en la cabina y uno en la caja; al tener a la vista las fotografías de los agentes Federales de Investigación adscritos a la Delegación Estatal Chihuahua de la Procuraduría General de la República, señaló que ***** es el más parecido al joven que se identificó como agente Federal Investigador al entrar al estacionamiento; asimismo, que la camioneta con las seis personas a bordo, se encontraba hasta el fondo del estacionamiento donde se encuentran los vehículos asegurados; cuando ingresó la camioneta pick up, color arena, al estacionamiento de la Procuraduría General de la República, como a los cinco minutos se dirigió a donde se encontraba dicha camioneta, discutían tres personas del sexo masculino, una de las personas, al parecer, lo identificó como *****, ya que es la persona que conducía el vehículo y quien le informó era agente Federal de Investigación, le enseñó un gafete que no vio claramente; al momento de acercarse a la camioneta no observó que vejaran o maltrataran a alguna persona; permanecieron de diez a veinte minutos en el estacionamiento, posteriormente salieron cinco personas de dentro de la camioneta y en la caja iba otra persona.

Testimonial que adquiere valor probatorio, de acuerdo a lo establecido en el precepto 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que se rindió por persona que por su edad, pues cuenta con cuarenta años, capacidad e instrucción tiene el criterio necesario para juzgar el acto, por su probidad e independencia de posición y antecedentes personales, tiene completa imparcialidad, el hecho de que se trata lo conoció por

medio de los sentidos, por si mismo y no por inducciones ni referencias de otro, su declaración es clara y precisa, sin dudas, ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho y sobre sus circunstancias esenciales y no se observa que haya sido obligado a declarar por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno.

En suma, conforme a los anteriores dichos, y adminiculados entre si, se pone de manifiesto que Salvador Lira Ayala, fue detenido arbitrariamente, el veintinueve de septiembre del año en curso, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, en las inmediaciones de la calle Rivera de Arroyo, del fraccionamiento Riveras del Bravo en esta ciudad, por espacio de cuarenta y cinco minutos aproximadamente, en tanto que el propio ofendido señala que lo dejaron en libertad después de transcurrido ese tiempo desde que lo detuvieron, en unos taxis que están por esa zona; y por otro lado ***** indicó que salió a buscar a su padre a estación Aldama donde les informaron no saber nada, su hermano ***** le habló a su celular, le dijo le llamó su papá que ya iba rumbo a su casa, por lo que se regresó y su papá ya estaba ahí; conducta ilícita atribuida a un miembro de la Agencia Federal de Investigación.

Sin embargo, no obstante que no realizaba delito flagrante alguno, fue privado de su libertad, sin que mediara mandamiento ministerial o judicial para retenerlo.

Aunado a lo anterior, durante el tiempo de la detención no fue puesto a disposición de autoridad competente, ni se dio aviso a un superior de tal acto, ni tampoco se informó a familiar o amigo respecto a la detención de aquél, pues lo único que sucedió en ese tiempo además del abuso que recibió hacia su persona, cuestión ponderada en la consideración inmediata anterior, con el objeto de exigir la entrega de la cantidad de tres mil dólares moneda americana, lo que implica el dolo por parte del activo para llevar acabo el ocultamiento de la persona contra su voluntad, de manera forzada, pues con el hecho de detenerlo en la vía pública, llevarlo a una tienda de autoservicio, en la que

se encontraba otra persona, a quien presionaban para que imputara actos ilícitos a *****, y posteriormente trasladarlo al estacionamiento de la Delegación de la Procuraduría General de la República, para después de insultarlo, lo dejaran en libertad, pone de manifiesto que se realizó un acto de desaparición forzada de una persona, pues no existía razón u objeto alguno para llevar acabo dicha conducta; y, en el inter, esto es, desde que inició su detención hasta que fue puesto en libertad, no se realizó acción alguna de ponerlo a disposición de una autoridad oficial, ni reporte, con objeto de dar a conocer a quien indagara sobre su paradero, el lugar en el que aquél se encontraba o la causa de su detención.

Sin que obste el hecho de que tanto *****, en posteriores declaraciones ante el agente del Ministerio Público de la Federación, como el primero de los nombrados y *****, ante este órgano jurisdiccional, se retractaran en sus dichos, al indicar que no reconocían al aquí enjuiciado como la persona que participó el día de los hechos; pues ese dato como en la siguiente consideración se explicará, tiene que ver con la responsabilidad de la persona a la que se imputa esa conducta, no así a la materialización del hecho delictivo.

Luego los medios de prueba reseñados, razonados silogísticamente, permiten llegar a la verdad por conocer, esto es que un miembro de la Agencia Federal de Investigaciones, en ejercicio de sus funciones, el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, detuvo a una persona, la que dolosamente la mantuvo oculta durante aproximadamente cuarenta y cinco minutos, sin que la pusiera a disposición de autoridad competente, ni que existiera mandato alguno de éstas, y así provocó un perjuicio a la libertad personal de *****, con lo que lesionó el bien jurídico tutelado por la norma.

En consecuencia, del análisis, en conjunto y concatenados entre sí, de los elementos de prueba, con el valor probatorio asignado a cada uno de ellos en lo individual, integran

prueba circunstancial en términos del dispositivo legal 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, con valor suficiente para demostrar los elementos de la materialidad del antijurídico que se analiza, cuyo lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, ya se precisaron, por lo que se acredita el ilícito de **desaparición forzada de personas**, previsto en el artículo 215-A y sancionado por el numeral 215-B del Código Penal Federal.

Apoya la jurisprudencia seiscientos sesenta y tres, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable a página cuatrocientos quince, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, que señala:

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. *La moderna legislación en materia penal ha relegado a segundo término la declaración confesora del acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborado con otras pruebas, y, por el contrario, se ha elevado al rango de "reina de las pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado”.*

De igual forma, se invoca la jurisprudencia doscientos setenta y cinco, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a páginas doscientos a doscientos uno, del Apéndice del Semanario Judicial de la federación 1917-2000, Tomo II, correspondiente a la Materia Penal, de rubro y texto siguientes:

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACIÓN DE LA. *La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato para complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado”.*

SEXTA. Responsabilidad penal.

Los mismos elementos de convicción reseñados en las consideraciones cuarta y quinta, en relación con la tercera, de esta resolución son aptos y suficientes para tener por acreditada plenamente la responsabilidad penal de *****, en términos

de lo dispuesto por el artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal, en su carácter de autor material, respecto del delito de **abuso de autoridad**, previsto por el artículo 215, fracción II, y sancionado en el penúltimo párrafo del mismo numeral, así como el diverso de **desaparición forzada de personas**, contemplado en el precepto 215-A y penalizado por el ordinal 215-B, todos del Código Penal Federal.

Sin que se acredite en su favor alguna causa de licitud o excluyente de responsabilidad penal, pues tuvo pleno dominio del hecho, dado que podía determinar cómo, cuándo y dónde realizar el evento antisocial; además podía modificar, suspender o continuar la realización del hecho antijurídico, no obstante lo anterior desplegó las conductas delictivas, esto es, revestido en su carácter e autoridad y ejerciendo sus funciones, detuvo e insultó a una persona sin causa legítima; además, la mantuvo dolosamente oculta por espacio de cuarenta y cinco minutos aproximadamente.

La conclusión anterior se apoya en la valoración de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, pero sobre todo, de la imputación formulada por *****; quienes lo reconocen como el sujeto directo que realizó las conductas imputadas; declaraciones a las que a cada una de ellas y, por las razones asentadas en las consideraciones precedentes, se otorgó valor probatorio de indicio, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo legal 285 del Código Federal de Procedimientos Penales.

No obsta lo anterior que ***** , adujera en su segunda declaración ministerial que respecto a la identificación que hizo de los agentes, no está muy seguro que hayan sido los mismos que lo agredieron, ya que se encontraba muy nervioso y asustado, y ante este juzgado federal el cuatro de mayo de dos mil seis, que respecto a su declaración de treinta de septiembre de dos mil cinco, en el sentido que manifiesto textualmente “*que reconoce sin temor a equivocarse, a los agentes de nombre ***** , como las mismas personas que le pidieron dinero y lo*

privaron de su libertad”, eso no lo dijo, lo que dijo es que más o menos se parecían, no exactamente, porque ese día andaba asustado; asimismo que durante sus comparecencias en averiguación previa, no le presentaron físicamente a las personas que por medio de fotografías había manifestado que eran los que más se parecían, los pidió, pero no se los presentaron; además al tener a la vista a ***** y preguntar si éste es la misma persona que interviniera en los hechos en los que fuera privado de su libertad y que denunciara, si es la persona que lo privó de su libertad y lo vejó, entre otras cosas, manifestó que aquél no es, el otro era más fornido y poco más alto, porque cuando lo agarró de la mano, sintió el apretón; a petición del testigo solicitó que el encausado manifestara algunas palabras para escuchar su voz, a lo que se le solicitó a ***** dijera su nombre, por lo que el compareciente señaló que la voz de la persona que lo detuvo era más grave, como de una persona más adulta.

Lo anterior, toda vez que su primigenia versión de los hechos fue al siguiente día de lo acontecido, a las diez horas con treinta minutos, cuando acababan de transcurrir aproximadamente doce horas reacontados los hechos.

Ello permite inferir que, lejos de encontrarse asustado, estaba en un estado anímico consiente de lo que hacía, pues incluso fue a la oficina de averiguaciones previas local a presentar la denuncia y de ahí le dijeron que fuera a la Procuraduría General de la República.

Consecuentemente, de estar asustado podría haber desistido de su denuncia.

Por otro lado, su primer declaración, sucedió el día siguiente a los hechos; e, incluso claramente manifestó reconocer, al momento que se le exhibió el álbum fotográfico de servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de la República, sin temor a equivocarse a los agentes de nombres *****, como quienes le pidieron dinero y lo privaron de su libertad.

Versión que, por su cercanía con los hechos, tiene más credibilidad que las producidas posteriormente, puesto que al no justificar los motivos por los que en éstas retractó de su primigenia versión, no tienen el alcance probatorio pretendido por la defensa del acusado.

Por otro lado, en atención a lo que introduce *****, acerca de que el señalamiento directo contra el imputado no lo dijo ante el Ministerio Público de la Federación, que sólo señaló que se parecían más o menos a las personas quienes lo habían insultado y privado de su libertad, tal cuestión deviene inverosímil si se tiene en cuenta que la institución persecutora del delito, en su carácter de órgano de autoridad no tiene como objeto asentar cuestiones diferentes a las dichas por el ofendido; máxime si se tiene en cuenta que se trata de un miembro de la misma institución.

Así también, lo que aconteció en propia diligencia de cuatro de mayo de dos mil seis, en la que *****, al tener a la vista a ***** manifestó que no es la persona quien intervino en los hechos, por que la otra era más “fornida”, más alta y con la voz más grave de mas adulto; a ello se alza que el ofendido en su primera comparecencia ministerial de treinta de septiembre de dos mil cinco, indicó que al tener a la vista el álbum fotográfico del personal adscrito a la Agencia Federal Investigadora, así como de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscrito a esa Delegación Estatal Chihuahua, manifestó reconocer sin temor a equivocarse a los agentes de nombres *****, como quienes le pidieron dinero y lo privaron de su libertad, fotografía que por cierto la que obra en foja treinta y dos del original de la causa es nítida y refleja claramente el rostro del justiciable de mérito, sin que se pueda aducir que esta borrosa o en mal estado, por ello es que prevalece la primera imputación que realiza al indicado respecto de la conducta delictiva.

Se considera para ello la tesis VI.2o.214 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página mil

ciento veintidós, Tomo: VIII, Octubre de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente:

“CONFRONTACIÓN. *Aun cuando de acuerdo con el criterio de la Sala responsable, se haya practicado en forma irregular una confrontación, entre el testigo y el reo, ello sólo significa que esa diligencia no tiene valor como confrontación, pero sí puede tenerlo como dato presuntivo no especificado, sobre todo, si está corroborado por el reconocimiento que dicho testigo hizo del reo, por una fotografía, reconocimiento que no adolece de la deficiencia de la confrontación”.*

En este mismo orden de ideas, lo manifestado ante este recinto judicial, por Obed Eduardo Lira Rodríguez, al tener a la vista a *****, en cuanto señaló no es la misma persona que intervino en los hechos en los que fuera privado de su libertad *****, no es quien privó de su libertad y vejó a su padre; se torna inatendible, pues lo único que menciona para apoyar su dicho es que la persona que privó de la libertad a su padre era alto, “rellenito”, con voz ronca y grave, y como su papá había dicho que eran los más parecidos por eso lo manifestó así.

Sin embargo, en su primigenia versión apuntó que al tener a la vista el álbum fotográfico del personal adscrito a la Agencia Federal Investigadora y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subdelegación Estatal en Chihuahua, manifestó reconocer sin temor a equivocarse a *****, como las mismas personas que llegaron a su domicilio y se llevaron a su padre, versión que emitió al día siguiente de transcurridos los hechos

En ese sentido, virtud al principio de inmediatez procesal, prevalece la eficacia probatoria concedida a las primeras declaraciones de *****, por su espontaneidad; no así a las segundas, como a los careos constitucionales contra el indiciado, en el que también indicaron que ***** no es la persona que había participado en los hechos materia de veintinueve de septiembre de dos mil cinco, pues se consideran producto de reflexión.

Razonamiento por el que, tampoco se concede eficacia a lo expuesto en su segunda declaración por *****, en el que,

afirma que el inculpado no es quien iba en la camioneta que vio el veintinueve de septiembre de dos mil cinco por la noche en el estacionamiento de la Procuraduría General de la República.

Se considera la jurisprudencia número trescientos ochenta y tres, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos setenta y nueve, Tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente:

“TESTIGOS. VALOR PREPONDERANTE DE SUS PRIMERAS DECLARACIONES. *En el procedimiento penal debe darse preferencia a las primeras declaraciones que los testigos producen recién verificados los hechos y no a las modificaciones o rectificaciones posteriores, tanto por que lógico es suponer espontaneidad y mayor veracidad en aquéllas y preparación o aleccionamiento hacia predeterminada finalidad en las segundas, como por que éstas sólo pueden surtir efecto cuando están debidamente fundadas y comprobadas”.*

De igual forma, apoya lo anterior, las tesis VI.2o. J/61 y V.2o. J/94, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, respectivamente, publicada la primera en la página quinientos setenta y seis, Tomo IV, Agosto de 1996, Novena Época, y en la página cincuenta y tres, Tomo 80, Agosto de 1994, Octava Época, ambas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señalan:

“RETRACTACIÓN. INMEDIATEZ. *Las primeras declaraciones son las que merecen mayor crédito, pues por su cercanía con los hechos son generalmente las veraces, por no haber existido tiempo suficiente para que quien las produce reflexione sobre la conveniencia de alterar los hechos. Este criterio jurídico, que da preferencia a las deposiciones iniciales, tiene su apoyo en el principio lógico de contradicción y cabe aplicarlo no sólo en tratándose de retractaciones hechas por el acusado, o por los testigos, sino también por la ofendida”.*

“RETRACTACION DE LOS TESTIGOS DE CARGO. *El juzgador debe estar a la primera de las manifestaciones de los testigos de cargo, cuando cerca de éstos no se hace sentir el consejo técnico del abogado defensor o de los familiares del acusado, quienes con el propósito de mejorar la situación jurídica de éste, determinan a los sujetos del testimonio y a éste último a alterar la verdad de los acontecimientos, logrando que den una versión distinta con el propósito de exculpar o atenuar la responsabilidad del acusado”.*

Por otro lado, ***** **Acevedo**, en su declaración ministerial de cuatro de octubre de dos mil cinco, ratificada ante este juzgado vía preparatoria, negó haber participado en los

hechos materia de la presente causa penal, pues señaló que ***** , en su denuncia de treinta de septiembre de dos mil cinco, manifestó que unas personas acudieron a su domicilio el día veintinueve de ese mes, aproximadamente a las diez horas con treinta minutos de la noche, lo subieron a una camioneta gris, en la cual lo llevaron al estacionamiento de las oficinas de la Procuraduría General de la República, y le pidieron una cantidad de tres mil dólares; al respecto manifestó que el jueves veintinueve de septiembre de dos mil cinco, se encontraba físicamente en las instalaciones de la Procuraduría General de la República para el pase de lista, y aunque no firmó el formato de asistencia el mismo tiene el reporte R/T, que significa reporte de trabajo; posteriormente solicitó permiso para cumplir un mandamiento ministerial, para ubicar un domicilio, fueron a la camioneta marca Dodge Ram, color blanco, placas ***** , asignada al grupo de la UMAN, la que está a resguardo de ***** , quien esa noche se encontraba en el servicio de guardia, se las prestó desde aproximadamente las doce del día, ya que la camioneta asignada a su persona, Chevrolet Silverado, color arena, placas ***** estaba descompuesta de la rótula desde el miércoles en la tarde, posteriormente de ubicar el lugar, fue a dejar a Gabriel a su domicilio, aproximadamente a las veintidós horas, se retiró a su domicilio y llegó como a las diez cuarenta de la noche, ahí permaneció hasta el día siguiente hasta las ocho treinta, por lo que niega que haya intervenido en los hechos que señaló el denunciante; el viernes en la noche no se reportó al pase de lista ya que la comida le hizo daño, dejó a las siete de la tarde a su compañero en su domicilio, de ahí se fue a la casa de un amigo; el domingo, cuando se reportó al servicio de guardia antes de las diez de la mañana, el encargado ***** , le dijo que tenía una orden de localización y presentación, respondió que se presentaría el lunes.

Para corroborar su versión ofreció como probanzas las testimoniales de ***** .

En lo referente a *****, este adujo que las oficinas de la Delegación de la Procuraduría General de la República en esta ciudad se encuentran en la Zona Pronaf, y las instalaciones de la UMAN se encuentran en la estación Babícora de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, no se encuentran en el mismo edificio; el tiempo que tardan los elementos comisionados en la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo para cumplir con el pase de lista que debe de hacerse en las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República, se les cita a las nueve horas y a las veintiuna horas, se da una tolerancia entre diez o quince minutos aproximadamente, se pasa la lista de asistencia que dura aproximadamente de cinco a diez minutos; ***** como encargado de la UMAN, realizaba sus funciones en las instalaciones de la UMAN, ya que las investigaciones, y todo el trabajo que se genera del agente del Ministerio Público de esa unidad eran asignados al personal que se encontraba adscrito a ese lugar, y no tenían trabajo asignado de la delegación, ya que por obvia razón, informes, detenidos, y todo el trabajo relacionado con los elementos adscritos a esa unidad es puesto a disposición de los agentes del Ministerio Público que se encuentra adscrito ahí; el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, ***** si se encontraba físicamente en el pase de lista de las nueve de la noche, aquel solicitó autorización para salir a trabajar y está dentro de las facultades del dicente poder autorizar este tipo de situaciones ya que son policías las veinticuatro horas del día y el pase de lista es de control personal, que estén físicamente bien, para saber si alguien se encuentra en incapacidad o faltando por alguna otra razón, y si se encuentra faltando por causa injustificada procede a un arresto; el acceso de los elementos de la Agencia Federal adscritos a la Jefatura regional en esta ciudad, en las instalaciones de la delegación a efecto del pase de lista, es única y exclusivamente por el portón que se encuentra de lado de las instalaciones de Teléfonos de México, es decir, a un lado

de la discoteca “Esfinge” y eso es una orden ya que en esa área se encuentran las oficinas de la agencia federal; las funciones como supervisor operativo sobre *****, eran las mismas para los elementos que se encontraban comisionados al UMAN como para todos los elementos que se encuentran adscrito en la jefatura regional de este Estado, es decir, se les supervisa estadísticamente el trabajo que presentan, la cantidad de operativos y cateos, la asignación y el estado de los vehículos, el pase de lista diario, su comportamiento, su vestimenta, entre muchas otras funciones; cuando refiere que ***** le informó que se retiraría a continuar trabajando y por tanto, no estaría presente en el pase de lista precisamente el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, el motivo era en relación a sus investigaciones asignadas, pero no específicamente de cual, puesto obra prueba que así lo corrobore; mientras estuvo como encargado ***** de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, eran dos vehículos que estaban asignados a esa unidad, pero específicamente no recordó; respecto a dichos vehículos, recuerda que le habían reportado un vehículo con fallas mecánicas, del cual al parecer ya habían trasladado a un taller mecánico, desconocía la falla, y el taller y en específico el vehículo; quién le reportó el vehículo con fallas mecánicas, al parecer fue ***** porque él era el responsable y encargado de esa unidad; no recordó cuándo el vehículo que reportó ***** con fallas mecánicas quedó en perfectas condiciones para ser utilizado nuevamente; el acceso en la Delegación de la Procuraduría General de la República al público en general, y demás personal de la Procuraduría General de la República exceptuando a los agentes Federales de Investigación es por la entrada que se encuentra enfrente de la avenida Abraham Lincoln, ya que dicha orden se deriva de que adentro de las instalaciones de la delegación como en otras oficinas de Gobierno y por cuestiones de seguridad no pueden andar armados, ese es el motivo por el cual tienen la entrada restringida.

De la anterior testimonial se desprende que **Víctor Alberto Guerrero Acevedo**, estaba comisionado a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo y ahí era donde realizaba sus funciones inherentes a su cargo, unidad la cual indica está en la estación Babícora de la policía municipal y no donde se encuentra la Delegación de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, eso no implica que no visite las instalaciones de la delegación federal, pues como agente perteneciente a esa institución, es obvio que tenía autorización para internarse en las instalaciones; aunado a lo anterior, Zapata Cisneros es claro al aducir que los elementos comisionados en la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo para cumplir con el pase de lista que debe de hacerse en las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República, se les cita a las nueve horas y a las veintiuna horas, se da una tolerancia entre diez o quince minutos aproximadamente, se pasa la lista de asistencia que dura aproximadamente de cinco a diez minutos; lo que indica su facilidad de internación a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, y por ello es que no se imposibilita su pase al estacionamiento; además, que el día de los hechos cuando se introdujeron con Basilio Martínez, a éste ***** le mostró su identificación oficial; ahora, respecto a que ***** señala que ***** estuvo presente en el pase de lista de las veintiuna horas, el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, se alza, como se vio anteriormente, que los hechos denunciados por ***** se suscitaron aproximadamente a las diez horas con treinta minutos, lo que dista en una hora y media del pase de lista de esa fecha, tiempo en el cual no eran vistos por *****, y que si bien pudieron aprovechar para realizar la actividad ilícita imputada; máxime que momentos antes del pase de lista de ese día, solicitaron permiso para retirarse por tener mandamiento ministerial, del que por cierto, el testigo en comento no tenía

conocimiento específicamente de cuál; ni prueba hay de su existencia.

En atención a que refiere que todos los agentes federales de investigación por órdenes superiores tienen que entrar forzosamente por el portón, y que de ello el imputado señaló en su declaración ministerial que el día treinta de septiembre de dos mil cinco, entró a las instalaciones de la delegación para el pase de lista aproximadamente a las nueve horas con cinco minutos por el portón y cuando se fue eran aproximadamente las nueve horas con treinta minutos y también salió por el portón, por lo que aduce el ofendido no lo pudo ver al subir al edificio; empero, *****, lo que indica es que al subir las escaleras del edificio identificó a los agentes que le pidieron dinero, como los dos que tripulaban el vehículo Silverado, pero no aduce exactamente dónde fue que los identificó, si estos iban en la calle a bordo de un vehículo, o si estaban en algún lugar de las instalaciones de la delegación.

Asimismo, ***** aduce le habían reportado un vehículo con fallas mecánicas, del cual, al parecer, ya habían trasladado a un taller mecánico, desconocía la falla, y el taller y en específico el vehículo; quién le reportó el vehículo con fallas mecánicas, supuestamente fue ***** porque él era el responsable y encargado de esa unidad; empero, no le consta directamente tal acontecer pues sólo le avisaron, más como el propio testigo indica desconocía, la falla, el taller y el vehículo, lo que no se puede aducir claramente que el vehículo asignado a ***** estaba descompuesto.

Por las anteriores manifestaciones es que la testimonial de *****, no apoya la versión defensiva del inculcado, máxime que no fue testigos de hechos y desconocía donde se encontraba aquél al momento que privaban de su libertad y vejaban a *****, pues no lo tuvo a la vista todo el tiempo.

Así, es que a la testimonial de ***** es de no otorgarle valor probatorio, con base a lo establecido en el numeral 289, fracción III, del código adjetivo de la materia, pues

no conoció el hecho reclamado, por lo que se considera su deposición como de coartada, con el propósito de beneficiar al imputado.

Apoya a lo anterior la tesis VI.1o.P. J/19, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuarenta y siete, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son:

“TESTIGOS DE COARTADA. *Tratándose de testigos de coartada, para que sean tomadas en cuenta sus declaraciones, deben de manifestar de momento a momento la conducta desplegada por el acusado, pues si no es así, pudiera darse el caso de que aquél haya aprovechado el momento no cubierto por los testimonios para cometer el delito”.*

Por otro lado, de la testimonial de ***** de cuatro de mayo de dos mil seis, quien ratificó ante este órgano jurisdiccional su declaración ministerial de dos de octubre de dos mil cinco; manifestó que en un vehículo oficial, tipo pick-up, dodge Ram, color blanco, sin recordar las placas de circulación, se retiraron de las instalaciones de la agencia Federal de Investigaciones el día veintinueve de septiembre de dos mil cinco, en la noche, después de haber solicitado autorización para retirarse a trabajar; ***** tenía asignado un vehículo oficial, tipo pick-up, Silverado, color arena; la razón por la que el día veintinueve de septiembre de ese año, no utilizaron el vehículo Silverado, color arena, para retirarse del lugar, fue porque estaba descompuesto de una rotula; desde que se retiraron de las instalaciones de la agencia federal de investigaciones, hasta que llegó a su domicilio el día veintinueve de Septiembre entre las veintidós o veintidós quince horas, siempre estuvieron físicamente juntos el compareciente y ***** , aproximadamente a esa hora llegó a su domicilio; generalmente al trasladarse de su domicilio a las instalaciones de la agencia federal de investigaciones cuando era necesario estar al pase de lista en el turno diurno, lo llevaba su esposa; no sabe si el vehículo Silverado, color arena, fue reparado; las instalaciones de la UMAN están ubicadas dentro de la estación

Babícora de Seguridad Pública, no recordó el domicilio, la delegación (oficinas de la Procuraduría General de la República) se encuentra ubicada en avenida Lincoln 820, y Hermanos Escobar, fraccionamiento La Playa; las funciones como agente federal son cumplir mandamiento judiciales y ministeriales, en septiembre veintinueve del año próximo pasado estaba adscrito a la UMAN, era su centro de trabajo donde se tenían que hacer todas las puestas a disposición; en relación a su declaración ministerial, cuando refiere que en fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco, aproximadamente a las veintiún horas salió de las instalaciones de la agencia federal de investigaciones, a ubicar un domicilio, precisamente el marcado con el número 3622, de la calle Estación Gallegos, en la colonia Satélite, estuvo en dicho lugar como veinte minutos, tardaron porque estaba oscuro, batallaron a localizar el número, asimismo, tenían las características del inmueble para su posible ubicación, porque todavía no sabían si existía; las personas que se percataron que ***** les prestó la camioneta marca Dodge, Ram, color blanco, desde aproximadamente las doce del día, fue el encargado del libro de gobierno del servicio de guardia de agentes, no recordó quien era, éste se dio cuenta que les entregó las llaves; de veinte a veinticinco minutos aproximadamente tardaron del domicilio ubicado el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, con motivo del mandamiento ministerial, hasta su domicilio al que lo llevó *****; éste le mencionó que se iba a descansar a su domicilio cuando lo llevó a su domicilio; desconoce el lugar en que se encontraba la camioneta asignada a *****, en la noche del veintinueve de septiembre de dos mil cinco, sólo sabía que estaba descompuesta; el treinta de septiembre de ese año, aproximadamente a las diez treinta de la mañana, fueron él y ***** a sacar las placas fotográficas del domicilio ubicado el día anterior; después del pase de lista, dan instrucciones y sale a trabajar, y no pudo especificar las personas que se percataron que el treinta de septiembre de dos mil cinco, aproximadamente

a las diez treinta horas fueron a sacar placas fotográficas; el treinta de septiembre de ese año, inmediatamente después del pase de lista, junto con *****, salió en un vehículo oficial, tipo pick-up, color blanco, dodge Ram, sin recordar las placas de circulación; no recordó cuando y a qué hora le entregaron a su compañero *****eza el vehículo que les prestó, la camioneta marca dodge, Ram, color blanco, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco; el veintinueve estuvo de guardia *****, y el treinta no supo en qué vehículo realizó aquél sus labores, estaba franco por el servicio de la guardia.

Ahora, es dable conceder que el testigo en comento apoye en su versión al acusado, pues como compañero de aquél al momento de los hechos materia de la presente causa penal, es obvio que le favorece el que no le resulte responsabilidad a aquel, pues cabe hacer mención que de las imputaciones que hacen *****, el treinta de septiembre de dos mil cinco, claro es que indican que sin temor a equivocarse quienes le pidieron dinero y privaron de su libertad al primero de los mencionados, son los agentes de nombres *****; cuestión que destaca el favorecimiento directo por parte del testigo al justiciable, pues de autos se advierte le puede recaer responsabilidad, por lo que su versión se valora como inatendible, al no reunir los requisitos a que se refiere el artículo 289, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que no es completamente imparcial.

Se considera para ello la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil setecientos ochenta y seis, del tomo CXI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala:

“TESTIGOS EN MATERIA PENAL. *El testigo es un instrumento, que de acuerdo con la teoría general del proceso, se ha dicho, es el más importante de los sujetos procesales; pero al mismo tiempo es el más peligroso, si no es veraz o es reticente; pues sólo cuando el relato de los sujetos de la prueba testimonial, cuando la versión de una experiencia percibida por los mismos, corresponde a la realidad del hecho o circunstancias percibidas, se puede decir que el testimonio tiene valor probatorio. De ahí que la capacidad testifical, sea consecuencia de que el relato llene estas exigencias procesales”.*

Por lo que hace a la testimonial de ***** de cinco de mayo de dos mil seis, quien manifestó recordar que alguna vez ***** le pidió que fuera como testigo en un asunto de la incumbencia de éste, la petición consistió sobre a que hora había llegado Víctor al domicilio donde viven, ubicado en avenida Guadalupe 6740, en Lomas del Rey, ciertos días, se acordó que le dijo eso un lunes, y el martes le dijo que había presentado algunos papeles, y a lo mejor lo llamaban; se acordó que día llegó ***** el jueves, porque le abrió el portón, entre diez y media y once, porque veía las noticias; a preguntas del agente del Ministerio Público de la Federación señaló, no recordó que fecha fue aquél jueves que refirió, cuando le abrió el portón a *****; en una camioneta blanca, Dodge, llegó al domicilio ***** el referido jueves, fue en la noche; la camioneta blanca, Dodge, que refiere, es el mismo vehículo en que aquél llegaba todos los días a su domicilio, también traía una color arena, Chevrolet; no recordó las características del vehículo color arena que refirió, era un solo color, cabina sencilla; no recordó cuándo fue la última vez que vio que ***** llegó a su domicilio en el vehículo color arena; no recordó cuántos días antes del jueves, llegó el imputado, a su domicilio con la camioneta blanca citada; el viernes siguiente por la mañana ***** salió de su domicilio en la camioneta blanca, en la dodge; aproximadamente antes de las nueve de la mañana salió de su domicilio el procesado en la camioneta blanca; ***** no salió de su domicilio posterior a la hora de llegada aquél jueves, hasta la hora en que menciona que lo vio salir en la camioneta blanca ya el viernes por la mañana; se encontraba en la cocina aquella noche del jueves veía las noticias, y cuando llegó Víctor le “pitó” y salió abrir el portón y en la mañana del viernes almorzaba, dijo “ya me voy” y salió abrir el portón, otra vez.

Del estudio de la anterior testimonial destaca el hecho de que el testigo no recordó la fecha en que señala que un jueves le abrió el portón a ***** , entre diez y media y once de la

noche; así pues, ante tal circunstancia y falta de conocimiento de que día realizó dicha actividad es que su versión respecto a los hechos es carente de medios convictivos para otorgarle valor jurídico, toda vez que carece de elementos esenciales para establecer si se cometió un ilícito o no, como lo es el tiempo, y ante ello es que cualquier jueves fue que pudo realizar tal cuestión.

Por lo anterior, es que su ateste no tienen el valor para corroborar lo expuesto por el inculpado, pues carece de lo expuesto por el numeral 289, en su fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales, pues desconoce el hecho total de la causa que nos ocupa, como el tiempo en que los ilícitos que nos ocupan se generaron.

Aplica al caso la tesis de la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecisiete, Tomo 68, Séptima Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son:

“TESTIGO NO PRESENCIAL. SU DICHO NO SE CONSIDERA COMO INDICIO. Si el testigo no conoce por sí mismo los hechos, su testimonio no puede ser considerado como indicio porque no satisface los requisitos exigidos por el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales”.

En atención al oficio SACH/359/2006, de cuatro de mayo de dos mil seis, signado por el Subdelegado Administrativo Estatal de la Delegación Estatal Chihuahua de la Procuraduría General de la República; en el que informa que el parque vehicular con el que cuenta esa dependencia en esta ciudad es de treinta y nueve vehículos oficiales, anexó al efecto una relación que especifica la marca, tipo, número de serie, motor, placas, modelo, color y ubicación de cada uno de ellos; asimismo, informa que la asignación de dichos vehículos a los diferentes departamentos se hace a través de resguardos internos emitidos por la subdelegación administrativa, la cual se firma de conformidad la recepción del vehículo por el titular del departamento.

Del estudio de dicho oficio y anexo se advierte que la flotilla de los vehículos en comento, es al cuatro de mayo de dos mil seis, esto es, siete meses, cinco días, después de acontecidos los hechos materia de la acusación, sin embargo, se aprecia en el reglón veintiocho del listado anexo, un automotor marca Chevrolet, tipo pick up C2, serie ***** , motor de ocho cilindros, placas ***** , modelo dos mil dos, color pewter, y su ubicación es el A.F.I. de esta ciudad; lo que corrobora que efectivamente existe dicho vehículo y está a disposición de la Agencia Federal de Investigación; más ello no es indicativo que los delitos de abuso de autoridad y desaparición forzada de personas no se hayan realizado, o bien, que con la existencia de dicho vehículo se releve de toda responsabilidad a *****; pues como quedó asentado en las consideraciones precedentes, se advierte que aquél es quien realizó las conductas que hoy se reprochan.

Ahora, por lo que introduce el justiciable de que el viernes en la noche (veintinueve de septiembre de dos mil cinco) no se reportó al pase de lista ya que la comida le hizo daño, y para corroborar su versión ofertó en etapa de averiguación previa copia simple de diagnostico médico y receta (foja 413), en el que se advierte la leyenda “diarrea dolor abdominal”, documental la cual se solicitó fuera cotejada por personal adscrito a este recinto judicial, lo que se realizó el siete de junio de dos mil seis, y al constituirse física y legalmente en las oficinas de la Dirección local del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue atendido por el subdirector Juan Ramón Ayala Franco, quien le puso a la vista la constancia de atención médica en urgencias del primero de octubre de dos mil cinco, folio 10532, efectuada a ***** , la que al ser cotejada y compulsada con la copia que obra a foja cuatrocientos trece de los autos originales de la causa, se dio fe de que no son idénticas, ya que el original está elaborado en papel membretado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero en cuanto a su

contenido coinciden en todo, quien atendió proporcionó una copia simple del original, misma que se agregó a la diligencia.

Empero, llama la atención el contenido expresó en la parte posterior de la constancia de atención médica, que textualmente dice: *“Paciente q’ de forma abierta refiere q’ acudió para solicitar incapacidad, no refiere enfermedad y ofrece dinero a personal administrativo se informa situación a ***** a las 18:45”*; cuestión está que pone en entredicho si es que realmente faltó a lista el día de los hechos por cuestiones de salud, lo que también se contrapone con su propio dicho, al manifestar que le había dicho al encargado operativo ***** que andaban en cumplimiento de un mandato ministerial y por ello es que no asistió al pase de lista; entonces, debido a las inconsistencias mencionadas es de no dar valor probatorio a dicha constancia médica, como para acreditar el extremo que pretende la defensa.

Así pues, ante la falta de medios fehacientes de prueba para corroborar la versión del encausado, es que prevalecen los elementos aportados por el fiscal federal integrador, para acreditar la materialidad de los delitos de **abuso de autoridad**, previsto por el artículo 215, fracción II, y sancionado en el penúltimo párrafo del mismo numeral, así como el diverso **desaparición forzada de personas**, contemplado en el precepto 215-A y penalizado por el ordinal 215-B, todos del Código Penal Federal, y hacer probable la responsabilidad de *****.

Por estas consideraciones, se concluye que no tiene el defensor público federal, razón alguna sobre lo que expone en su escrito de conclusiones de inculpabilidad, pues de líneas anteriores se desprende, que del conjunto de pruebas que existen en contra ***** , y del razonamiento lógico jurídico aplicable, no se advierte que las pruebas rendidas durante la preinstrucción e instrucción, desvirtúen las de cargo que pesan contra el acusado y que, adminiculadas en su conjunto, de conformidad en lo previsto por el dispositivo legal 286 del Código

Federal de Procedimientos Penales, integran prueba circunstancial con valor probatorio pleno, para hacer responsable a ***** en los ilícitos que se persiguieron.

En las relacionadas circunstancias, debe decirse, que con los medios de prueba recabados durante el proceso, se acredita plenamente la responsabilidad penal de *****, como quien el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, en las inmediaciones de la calle Rivera de Arroyo, del fraccionamiento Riveras del Bravo en esta ciudad, y posteriormente en las instalaciones del estacionamiento de la Delegación de la Procuraduría General de la República, realizó insultos contra una persona sin justificar su actuar, además de mantenerla dolosamente oculta, y así incurrió en las conductas atribuidas como autor material, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal, en la comisión dolosa de los ilícitos **abuso de autoridad**, previsto por el artículo 215, fracción II, y sancionado en el penúltimo párrafo del mismo numeral, así como el diverso **desaparición forzada de personas**, contemplado en el precepto 215-A y penalizado por el ordinal 215-B, todos del Código Penal Federal.

Al realizar un juicio de valoración en sentido negativo o excepción regla, no se advierte que la conducta desplegada esté al amparo de alguna causa de licitud por la cual el actuar del activo se torne lícito, luego se afirma que la acción desplegada por el acusado es antijurídica; asimismo, se advierte que al momento de realizar el hecho delictivo, tenía la capacidad para conocer lo ilícito de su proceder y quiso su realización, afirmación que se hace al no advertirse de las constancias que al momento de realizar dicho ilícito, hubiese actuado mediante un trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, que le quitara esa capacidad de querer y entender, por lo que debe concluirse que actuó con conciencia de la antijuricidad del hecho típico, al no advertirse que hubiera actuado bajo un error esencial e invencible de prohibición, ya por el desconocimiento de la ley de su alcance, o porque hubiere creído que su

conducta se encontraba amparada por alguna causa de licitud; por consiguiente, podía discernir entre el bien y el mal, esto es, entre realizar la conducta delictiva y no hacerla, finalmente optó por lo primero, todo lo anterior en términos del artículo 15 del Código Penal Federal.

Al respecto, es aplicable la tesis 1a. CVI/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos seis, Tomo XXIII, Marzo de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente literal:

“DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. *El dolo directo se presenta cuando la intención del sujeto activo es perseguir directamente el resultado típico y abarca todas las consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto prevé que se producirán con seguridad. El dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia a consecución de un resultado típico, sirve para determinar la existencia del dolo. Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla”.*

SÉPTIMA. Individualización de la pena.

Corresponde ahora individualizar la sanción que deberá aplicarse al sentenciado *********, tomando en cuenta para ello, las reglas conferidas en los artículos 51 y 52, del Código Penal Federal, los cuales establecen que en la aplicación de las sanciones penales se tendrá en cuenta:

A). La magnitud del daño causado al bien jurídico y la naturaleza de la acción de los medios empleados para ejecutarla.

En este aspecto es de tomarse en consideración que los delitos **abuso de autoridad**, previsto por el artículo 215, fracción II, y sancionado en el penúltimo párrafo del mismo numeral, así como el diverso **desaparición forzada de personas**, contemplado en el precepto 215-A y penalizado por el ordinal

215-B, todos del Código Penal Federal, exigen el despliegue de actos positivos, lo cual es desfavorable para el acusado, ya que, por regla general, requiere de mayor energía criminal llevar a la práctica la resolución de delinquir, mediante actos positivos que contemplar pasivamente, en contra del deber del garante, consistente en evitar el resultado, es decir el curso de un suceso que conduce a un resultado típico; de ahí que se diga que, el contenido de culpabilidad de la omisión es inferior al de los actos positivos.

Por su duración, ambos delitos en análisis, son permanentes, porque su consumación se puede prolongar voluntariamente en el tiempo, de modo que sea violatorio del derecho en cada uno de sus momentos, lo cual resulta desfavorable para el sentenciado, dada la comisión de los ilícitos y la lesión a los bienes jurídicos tutelados.

Por la clase delictiva a estudio y por las circunstancias especiales del caso, *****, el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, en las inmediaciones de la calle Rivera de Arroyo, del fraccionamiento Riveras del Bravo en esta ciudad, y posteriormente en las instalaciones del estacionamiento de la Delegación de la Procuraduría General de la República, realizó insultos contra una persona sin justificar su actuar, además de mantenerla dolosamente oculta, y de esta forma es que indebidamente actuó como servidor público en el ejercicio de su funciones, además de atentar contra la libertad de una persona en su obrar, siendo éstos los bienes jurídicos que tutela la norma.

B). Forma y grado de intervención del agente, su calidad y el de la víctima:

La forma y grado de intervención fue ponderada para estimar el grado de culpabilidad del acusado, al establecer que se trata en el caso de un autor directo de las conductas.

En el caso, es de considerarse como calidad especial del sujeto activo de la conducta, ser servidor público en ejercicio de

sus funciones, en el caso concreto agente Federal de Investigación.

Por otra parte, en este tipo de delitos, por su naturaleza, no es de estimarse como víctima a persona alguna en especial.

C). Circunstancias personales.

De autos se advierte que *****, al momento de cometer los ilícitos, contaba con facultades de discernimiento y decisión suficientes para ponderar las consecuencias de su conducta, pues contaba con veinticuatro años de edad, lo que le resulta desfavorable.

En cuanto a sus condiciones sociales, se advierte que es originario de México, Distrito Federal y vecino de esta ciudad, lo que indica que se desenvolvía en medios urbanos donde existen posibilidades de acceso a la educación y a la cultura, lo que le resulta desfavorable.

Por otra parte, es de considerarse que cursó la educación preparatoria, de lo que se deduce que su educación es media superior, por lo que sus oportunidades laborales y de superación personal no son restringidas, lo que se considera des favorable.

Se toma en cuenta que al momento de emitir declaración preparatoria, dijo estar desempleado, sin percibir ingreso alguno; de lo que se advierte que su situación económica es poco estable, en virtud de contar con dos dependientes económicos, lo que se toma a su favor.

Asimismo, beneficia al acusado el hecho de que tanto el director del centro penitenciario local, la agente del Ministerio Público adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, como el Departamento del Registro Nacional de Identificación de Sentenciados, informaron a este juzgado que no cuentan con antecedentes penales registrados a nombre de *****, por lo que se le considera como primodelincuente, documentales que reúne los requisitos exigidos por el dispositivo legal 280, del Código Federal de Procedimientos Penales, además no se objetaron por las partes.

También, obra a favor del encausado, las seis cartas de recomendación y buena conducta signadas por *****, a favor del sentenciado; mismas que no fueron objetadas por las partes; por tanto, tienen eficacia probatoria, al tenor de lo previsto por los artículos 272 y 285, del Código Federal de Procedimientos Penales.

Por otra parte, es de tomarse en cuenta, de manera favorable al sentenciado, la documental signada por el Comandante de Seguridad y Vigilancia, del Centro de Readaptación Social Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que informa que el interno de nombre ***** no se le encontró conducta negativa dentro de ese centro penitenciario.

Documental que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 280 del Código Federal de Procedimientos Penales, adquiere eficacia probatoria para acreditar el extremo que se pretende, con valor probatorio pleno, máxime que no se objetó.

Aplica al caso la tesis XX. J/26, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página trescientos cuatro, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:

“DOCUMENTAL PRIVADA, LA FALTA DE OBJECCIÓN HACE INNECESARIO PERFECCIONARLA. Si el documento privado exhibido en juicio no es objetado por la contraria en cuanto a su contenido o firma, ninguna obligación legal tiene el oferente en perfeccionarlo”.

D). Circunstancias de ejecución del delito.

El veintinueve de septiembre de dos mil cinco, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, en las inmediaciones de la calle Rivera de Arroyo, del fraccionamiento Riveras del Bravo en esta ciudad, y posteriormente en las instalaciones del estacionamiento de la Delegación de la Procuraduría General de la República, cuando estaba investido del carácter de servidor público, como agente Federal de Investigaciones, realizó insultos contra una persona sin justificar su actuar, además de mantenerla dolosamente oculta por espacio de cuarenta y cinco minutos aproximadamente, por lo que se estima, que los delitos que

cometió son graves.

La confrontación de los datos de referencia permiten concluir que *********, tiene un grado de culpabilidad equidistante entre el mínimo y el medio, ya que con su conducta cometió los delitos **abuso de autoridad y desaparición forzada de personas**, en tanto que le favorece tener una situación económica poco estable, pues no cuenta con empleo alguno que le reditúe ingresos económicos y tiene dos dependientes económicos, además que no se opuso a su detención.

En cuanto les son desfavorables que los delitos cometidos exigen un despliegue de actos positivos y por su duración son permanentes; el acusado, al momento de la comisión del ilícito contaba con veintitrés años de edad, tuvo acceso a la educación y cultura por desenvolverse en un medio urbano, ya que es originario de México, Distrito Federal y vecino de esta ciudad.

Ahora, ********* es responsable de la comisión de los delitos antes citados, esto es, **abuso de autoridad y desaparición forzada de personas**, por lo que se estima que se está ante la figura de un concurso ideal de delitos, en términos de lo dispuesto por el ordinal 18 del Código Penal Federal, que a la letra dice:

“(...) Existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Existe concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos”.

Ello sin perjuicio de que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en su pliego acusatorio, no haya realizado manifestación alguna respecto al concurso de delitos, pues lo cierto es que, como se mencionó, a juicio de esta resolutoria, en el caso concretó se está ante un concurso ideal de delitos.

Sirve a lo expuesto, la tesis 1a./J. 5/93, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochenta y nueve, del Tomo XXI, mayo de dos mil

cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del literal siguiente:

“CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS. Si la autoridad judicial, al analizar los hechos delictivos delimitados por el Ministerio Público en sus conclusiones, se percata que existe un concurso real de delitos, debe aplicar las penas correspondientes con base en dicho concurso, independientemente de que la institución acusadora haga o no expresa referencia en sus conclusiones a la aplicación de dicha regla. Sin que ello implique que la autoridad judicial rebase la acusación del Ministerio Público, porque tal regla atañe a la imposición de las sanciones que es facultad propia y exclusiva del órgano jurisdiccional, en términos del artículo 21 constitucional. Máxime que el Juez, al imponer las penas, no realiza un acto meramente mecánico, sino que goza de arbitrio judicial para calificar la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del agente, en función a lo cual debe necesariamente determinar la pena, toda vez que ésta, por mandato de ley, debe ser individualizada. Tal individualización que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial y de ningún modo puede realizar el Ministerio Público. Así pues, concluir de manera distinta anularía de facto el arbitrio del que está dotada la autoridad judicial para la imposición de las penas, y llevaría al absurdo de dejar que la función jurisdiccional permanecería supeditada a no poder hacer nada fuera de lo expresamente pedido por el representante social, con lo que se le otorgarían a ésta facultades fuera del límite de sus funciones, invadiendo con ello las del juzgador. Lo anterior, con independencia de que el juzgador no puede introducir en sus fallos penas por delitos que no hayan sido motivo de la acusación, ya que con ello no sólo se agravaría la situación jurídica del procesado, sino que incluso el Juez estaría invadiendo la órbita del Ministerio Público, a quien por mandato constitucional corresponde la persecución de los delitos, violando con ello el principio esencial de división de poderes. Es necesario precisar, que el criterio que ahora se establece no se contrapone con el contenido de las garantías de legalidad, seguridad jurídica, defensa y exacta aplicación de la ley, previstas en los artículos 14, 16 y 20, fracción IX, de la Carta Magna, ya que con el mismo no se autoriza al juzgador a actuar con base en atribuciones que no tiene expresamente concedidas en la Constitución y en las leyes secundarias; aunado a que la decisión del Juez de actualizar la existencia de un concurso de delitos y sancionar por el mismo, está supeditada a que funde y motive suficientemente su actuación, aunado a que no podrá imponer pena alguna respecto de un delito que no haya sido materia de acusación; además, de que el acusado tendrá oportunidad de conocer las conclusiones del Ministerio Público y dar respuesta a las mismas al formular las que corresponden a su defensa, todo esto previo al dictado de la sentencia respectiva en la que se le determine la punición de la autoridad judicial, en términos del numeral 21 de la Constitución Federal”.

Así, en el caso concreto no existe duda de que se está ante una pluralidad de delitos, pues se acreditó la materialidad del delito **abuso de autoridad**, previsto por el artículo 215, fracción II, y sancionado en el penúltimo párrafo del mismo numeral, así como el diverso **desaparición forzada de personas**, contemplado en el precepto 215-A y penalizado por el ordinal 215-B, todos del Código Penal Federal; empero, se efectuaron con una sola conducta.

Por tanto, se trata de un concurso ideal de delitos, virtud a que el acusado realizó una sola conducta, esto es, insultó a una persona sin justificar su actuar, además la mantuvo dolosamente oculta por espacio de cuarenta y cinco minutos aproximadamente.

En esa virtud, procede sancionarlo de acuerdo a lo estipulado por el numeral 64, primer párrafo, del Código Penal Federal, que señala:

*“**Artículo 64.** En caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las máximas señaladas en el Título Segundo del Libro Primero (...).”*

De ello el precepto legal 215, fracción II, y su penúltimo párrafo, del Código Penal Federal establecen:

*“**Artículo 215.** Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes: (...)*

II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare (...)

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII (...).”

Por su parte los arábigos 215-B y 215-C, de la codificación en cita señalan:

*“**Artículo 215-B.** A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión.*

Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por si mismos delitos (...).”

*“**Artículo 215-C.** Al servidor Público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de uno a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.”*

De los dos delitos cometidos, el que merece la mayor penalidad es el de **abuso de autoridad** contemplado por el artículo 215, fracción II, y sancionado en el penúltimo párrafo del mismo ordinal, con penalidad de **uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e**

inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos; mientras que el de **desaparición forzada de personas**, que también se le atribuye está sancionado con penas de **ocho meses a cuatro años de prisión**, puesto que el sujeto pasivo del delito, sólo estuvo desaparecido por aproximadamente cuarenta y cinco minutos.

Así pues, dado el grado de culpabilidad (equidistante entre el mínimo y el medio) en el que se ubicó al sentenciado, se estima justo y equitativo, aplicar a *********, por su responsabilidad en cuanto al ilícito de abuso de autoridad, **dos años, nueve meses de prisión**, decisión a la cual se aumenta respecto al ilícito de **desaparición forzada de personas** el equidistante entre el mínimo de prisión que se puede imponer, esto es tres días, atento al numeral 51, del Código Penal Federal, hasta ocho años, que es el máximo de su duración, lo que arroja como resultado **dos años, dos meses**, en razón de que se trata de un concurso ideal de delitos en términos del numeral 64, primer párrafo del Código Penal Federal, la cual se establece luego de tomar en consideración las circunstancias que sirvieron para graduar la culpabilidad del activo; y referente a la pecuniaria de **ciento doce** días se le debe aumentar **setenta y cinco** días, obteniéndose como resultado una pena de prisión de **cuatro años, once meses, de prisión y ciento ochenta y siete días multa**, equivalente esta última a la cantidad de ocho mil setecientos cincuenta y un pesos 60/100 moneda nacional (\$8,751.60). Asimismo también se impone a ********* **destitución e inhabilitación de cuatro años, once meses** para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En el entendido que la sanción pecuniaria se impone conforme al salario mínimo vigente en la región y época de los hechos, el cual era a razón de cuarenta y seis pesos con ochenta centavos moneda nacional, en atención a que el justiciable señaló ante este recinto judicial, vía preparatoria, no recibir ingreso alguno, por lo que este juzgado no tiene certeza

sobre el ingreso que percibe, así ante tal imprecisión, se toma como parámetro el salario mínimo vigente en la región y época de los hechos (veintinueve de septiembre de dos mil cinco).

Sirve a lo expuesto la tesis III.2º.P. J/9 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible a página treinta y uno, Tomo 86-1, Febrero de 1995, octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

“MULTA. ANTE LA IMPRECISIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR EL ACUSADO, EL SALARIO MÍNIMO SERA EL PARAMETRO PARA ESTABLECER LA CONDENA AL PAGO DE LA. Si de autos se desprende que no se acreditó de manera fehaciente el monto a que ascendían los ingresos del acusado, el juez de la causa, al momento de determinar la condena en días multa, deber tomar como base el salario mínimo vigente en la época de la comisión de los hechos delictuosos, conforme lo establece el artículo 29, párrafo tercero del Código Penal Federal”.

Pena pecuniaria que en el caso, no se ordena la sustitución de la misma por jornadas de trabajo a favor de la comunidad en el caso de que el sentenciado acredite su insolvencia, toda vez que las jornadas de trabajo a favor de la comunidad, no son un beneficio, sino que comparten la naturaleza de sanción, y atento a ello el Ministerio Público de la Federación debe pedir su aplicación para el caso de que el sentenciado acredite su insolvencia, lo que en el caso no acontece, y en ese sentido, como se indicó, no se ordena tal sustitución de multa por jornadas de trabajo a favor de la comunidad para el caso de que el encausado acredite su insolvencia.

Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 1ª./J.1/92, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, del Tomo 54, Junio de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente:

“TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD, NO ES UN BENEFICIO EL. La pena sustitutiva de jornadas de trabajo a favor de la comunidad, prevista en los artículos 24, punto 2 y 27 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, no es un beneficio, sino una pena, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50, Constitucional, párrafo tercero, que establece “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la

justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123”, en tal virtud, no procede dejar a elección del sentenciado se acoja a pagar la multa o que se le sustituya por jornada de trabajo. Consecuentemente, viola garantías la sentencia de segunda instancia que otorga tal alternativa máxime porque la sentencia de primera instancia no se impuso la sustitutiva de multa por jornada de trabajo y no interpuso apelación el Ministerio Público para que se aplicara”.

Así como, la jurisprudencia II.2º.P. J/13, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página mil trescientos setenta y ocho, Tomo XIX, Junio de 2004, Novena Época, del rubro y texto siguientes:

“SUSTITUCIÓN DE LA PENA PECUNIARIA POR JORNADAS DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD. TRATÁNDOSE DE LA INSOLVENCIA DEL SENTENCIADO ES VIOLATORIA DE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA SI NO ES SOLICITADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN SU PLIEGO DE CONCLUSIONES. De conformidad con la jurisprudencia 385 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 21/98, publicada en la página 281 del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: “TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD, NO ES UN BENEFICIO EL”, la jornada de trabajo a favor de la comunidad no es un beneficio, sino una pena de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º, párrafo tercero, de la Constitución Federal, por lo que tratándose del caso de insolvencia del sentenciado resulta violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica la sustitución de la pena pecuniaria impuesta por la Sala responsable, por jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad, si dicha sustitución no fue solicitada por la representación social en su pliego de conclusiones, ya que conforme a una correcta técnica procesal y de equilibrio de las partes, la actuación judicial debe ajustarse a los lineamientos del pliego de conclusiones del Ministerio Público, quien es el titular indiscutible de la acción penal, acorde con el artículo 21 de la Constitución Federal; por tanto, al ser éste un órgano técnico no corresponde al Juez subsanar sus deficiencias u omisiones, de manera que si en el caso, en la acusación si omitió solicitar tal sustitución, es obvio que la autoridad de instancia se encontraba impedida para realizarla”.

Por lo que hace a la pena de prisión, deberá computarse a partir del dos de mayo de dos mil seis, tiempo desde el cual permanece detenido por la comisión de los presentes delitos y que ha cumplido en forma ininterrumpida; pena que deberá compurgar en el establecimiento penitenciario que para el efecto designe el Órgano Ejecutor de Sanciones, dependiente del Ejecutivo Federal.

En el entendido que la cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo

dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena a que aluden los dispositivos legales 51 y 52 del Código Penal Federal.

En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia número doscientos treinta y nueve, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a páginas ciento setenta y ocho, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, correspondiente a la Materia Penal, del literal siguiente:

“PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena”.

OCTAVA. Concesión de beneficios.

En atención al quantum de la pena de prisión que le es impuesta al sentenciado *********, no ha lugar a concederle ninguno de los beneficios de sustitución o conmutación de la pena de prisión, establecidos en los ordinales 70 y 90, respectivamente, del Código Penal Federal.

NOVENA. En cumplimiento a lo dispuesto por el ordinal 42 del Código Penal Federal, y 528 del Código Federal de Procedimientos Penales, amonéstese a *********, haciéndole ver las consecuencias de los delitos que cometió, conminándolo a la enmienda y previniéndolo que se le impondrá una sanción mayor en caso de reincidencia.

DÉCIMA. Atento a lo contemplado por el artículo 45 del código punitivo federal, se suspende al sentenciado del ejercicio de sus derechos políticos, hasta por el término de la pena de prisión impuesta, por lo cual deben remitirse las formas de notificación respectivas al vocal del Registro Federal de Electores.

Sin embargo, no ha lugar a suspender a ********* en el ejercicio de los derechos de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial,

síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador, o representante de ausente, a que se refiere la última parte del numeral 46 del Código Penal Federal, en principio, porque el Fiscal de la Federación no lo solicitó al formular conclusiones acusatorias y, además, porque en función de los ilícitos cometidos, no se considera quebrantada la confianza filial o legal por parte del activo, para que aquéllos se le suspendan.

Tiene aplicación el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicado en la página mil ciento uno, Tomo XVI, Noviembre de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Penal, de la siguiente literalidad:

“SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES DEL SENTENCIADO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. *La suspensión de los derechos políticos del sentenciado, a que se refiere el numeral 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante la extinción de una sanción privativa de libertad, no requiere la petición expresa por parte del Ministerio Público de la Federación, por ser aquélla una consecuencia necesaria de la pena de prisión impuesta en la sentencia condenatoria; sin embargo, por lo que hace a la suspensión de los "derechos civiles" de aquél, esto es, cuando la condena no se refiere sólo a los derechos que de manera limitativa enumera el artículo 46 del Código Penal Federal, es necesario que concurren dos aspectos para que proceda la suspensión de ellos: el primero, que la representación social lo solicite expresamente, y el otro, que ello esté en función con el ilícito cometido y la necesidad de que sea suspendido al haber sido quebrantada la confianza filial o legal que fue generada, ello por no encontrarse contemplada esta sanción en esos términos, en alguna de las hipótesis previstas en el precepto legal de referencia”.*

DECIMA PRIMERA. Envíese copia autorizada de la presente resolución al Director del Centro de Readaptación Social de esta ciudad, y al agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, para los efectos legales a que haya lugar.

Infórmese al Director General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, residente en México, Distrito Federal, que en esta fecha se dictó sentencia en esta causa penal, sin perjuicio de hacerle de su conocimiento cuando ésta cause ejecutoria.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Víctor Alberto Guerrero Acevedo es penalmente responsable de la comisión del delito **abuso de autoridad**, previsto por el artículo 215, fracción II, y sancionado en el penúltimo párrafo del mismo numeral, así como el diverso **desaparición forzada de personas**, contemplado en el precepto 215-A y penalizado por el ordinal 215-B, todos del Código Penal Federal.

SEGUNDO. Por tal responsabilidad penal se impone a *********, la pena de **cuatro años, once meses, de prisión y ciento ochenta y siete días multa**, equivalente esta última a la cantidad de **ocho mil setecientos cincuenta y un pesos 60/100 moneda nacional (\$8,751.60)**.

Asimismo, se impone a *********, **destitución e inhabilitación de cuatro años, once meses** para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Lo anterior de conformidad con la consideración séptima de esta resolución.

TERCERO. De las razones expuestas en la consideración octava de esta resolución, se niegan al sentenciado los beneficios de sustitución de la pena de prisión impuesta y el de la condena condicional.

CUARTO. Amonéstese al sentenciado *********, para que no reincida ni genérica ni específicamente en el futuro, con fundamento en lo que ordena el numeral 42 del Código Penal Federal y 528 del Código Federal de Procedimientos Penales.

QUINTO. Del contenido del artículo 45 del Código Penal Federal, y en atención a la consideración décima se suspende al sentenciado del ejercicio de sus derechos políticos, hasta por el término de la pena de prisión impuesta, por lo cual deben remitirse las formas de notificación respectivas al vocal del Registro Federal de Electores.

SEXTO. Remítase copia autorizada de la presente resolución, así como los oficios que correspondan a las autoridades que se mencionan en la consideración décima primera de este fallo.

SÉPTIMO. Dígasele a las partes que conforme los artículos 368 y 369 del Código Federal de Procedimientos Penales, tienen derecho a apelar en el momento de la notificación o dentro de los cinco días siguientes.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo sentenció y firma la licenciada **Marta Elena Barrios Solís**, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario licenciado **Elfego Bencomo Siller**, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.

'En términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos'.